

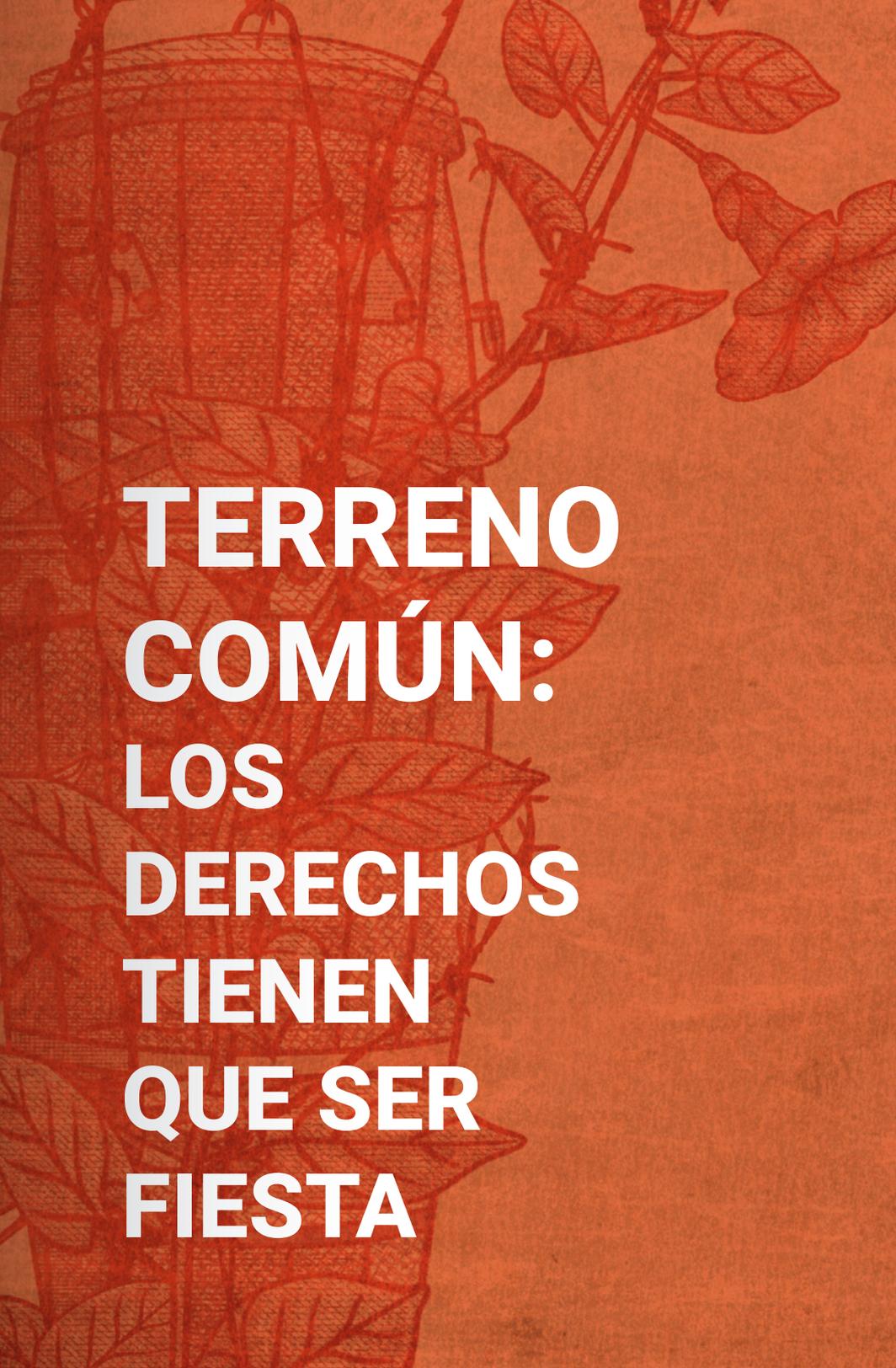
TERRENO COMÚN: LOS DERECHOS TIENEN QUE SER FIESTA



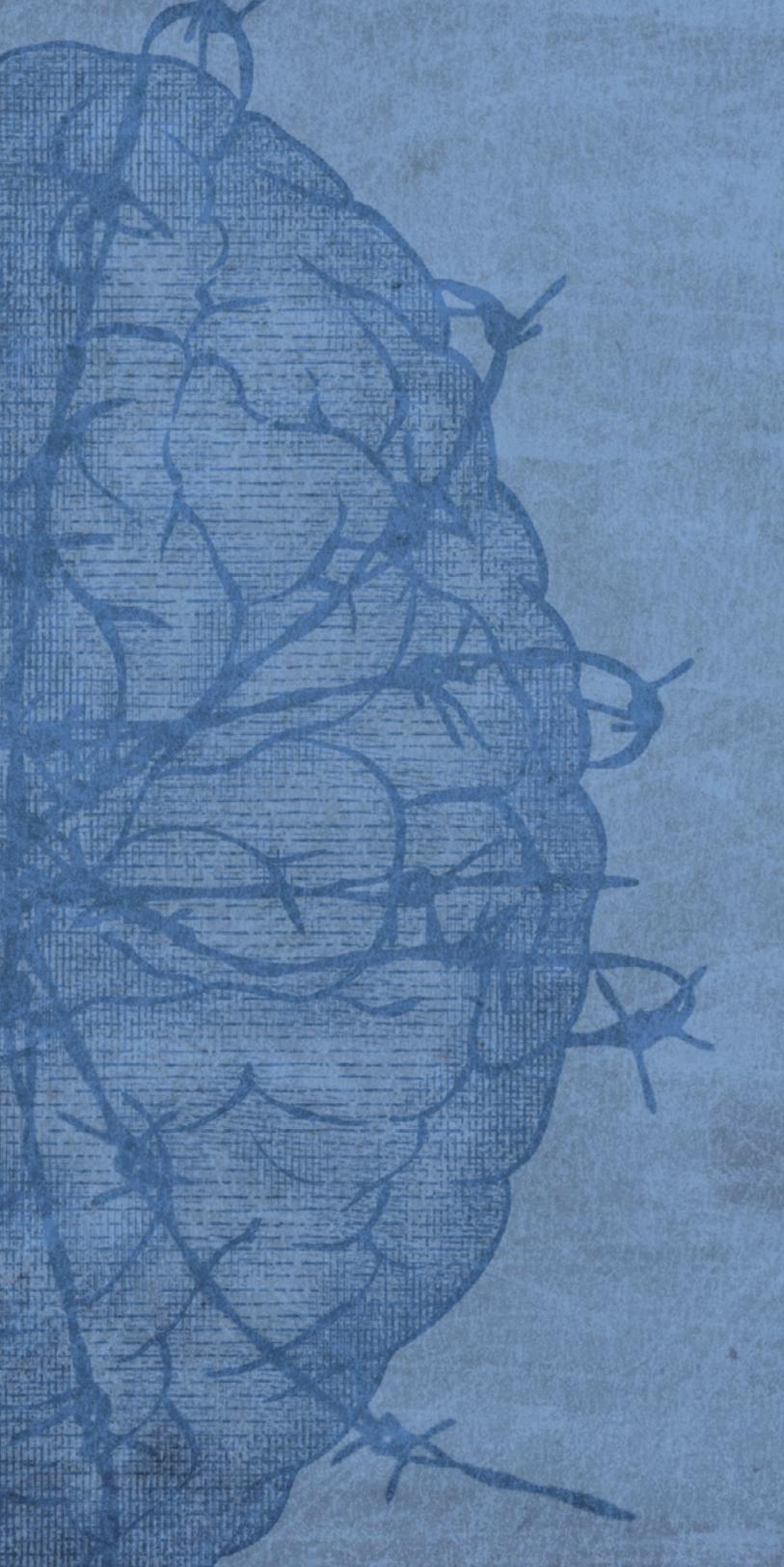
Cofinanciado por
la Unión Europea



Derechos



**TERRENO
COMÚN:
LOS
DERECHOS
TIENEN
QUE SER
FIESTA**



**Los periodismos en
derechos y para los sentidos
comunes buscan pasar de
las narrativas del odio a las
de la dignidad y futuro.**



Derechos

TERRENO COMÚN: LOS DERECHOS TIENEN QUE SER FIESTA

- © Fundación Friedrich Ebert (FES)
- © Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
- © Ciudad Alternativa
- © Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL)

AUTORES:

Ignacio Juan Vázquez Carneiro
Melvin Julio Mateo
Adriana Suels
Helen Bruján
Dulce Grillo

EDITORA:

Natalia Arenas

ILUSTRACIONES:

Yoandy Ramos

COORDINACIÓN:

Tessa Ramírez

REVISIÓN:

Paula Rodríguez
María Fernanda López

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

NODO. Comunicación + Diseño

ISBN: 978-9945-509-63-2



**Cofinanciado por
la Unión Europea**



CIPAF



El uso comercial de esta publicación está prohibido sin previa autorización de Ciudad Alternativa, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Centro Integral para el Desarrollo (CIDEL) y la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Contenido

PRESENTACIÓN	6
PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN	21
LOS CUERPOS QUE SOSTIENEN EL PARAÍSO: Trabajo sexual y apatridia en el batey	27
PROHIBIDO ALQUILAR: La vivienda como herramienta de discriminación social	39
UN CALVARIO MODERNO: La salud mental en República Dominicana	49
CUANDO LA VEJEZ DUELE: Abandono, abuso y olvido en adultos mayores dominicanos	61
DONDE EL TAMBOR RESISTE: La música afro dominicana reclama su derecho a existir	69



PRESENTACIÓN

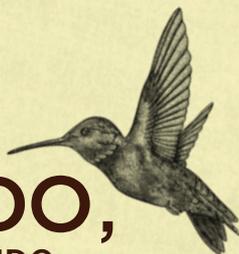
La República Dominicana enfrenta profundas desigualdades económicas, sociales y de género que, a pesar de su histórico crecimiento económico, se han perpetuado en el tiempo. Estas brechas no solo limitan oportunidades, sino que constituyen una negación histórica de derechos para amplios sectores de la población. Son voces y demandas que pocas veces encuentran un parlante capaz de amplificarlas y colocarlas en los medios de comunicación o en la agenda pública.

Para responder a este desafío, el proyecto “**Más Derechos**” busca, entre otras cosas, posicionar nuevas narrativas sobre Derechos Humanos que contrarresten los discursos de odio y exclusión presentes en la esfera informativa y política del país.

En este marco, el Taller Experimental en formato de sala de redacción “Resignificar las narrativas de Derechos Humanos”, del que surge esta publicación, se propuso (re)pensar la agenda informativa desde los sentidos comunes de la gente. El ejercicio apostó por un periodismo que tome como base los saberes cotidianos, que explore estéticas diversas y que construya narrativas desde la mirada de la ciudadanía común.

Este libro es, en ese sentido, una invitación a abrir el debate, disputar significados e imaginar un terreno común donde los derechos no sean privilegio de pocos, sino garantía y celebración para todas las personas.

VAMOS GANANDO, SENTIMOS QUE ESTAMOS PERDIENDO



OMAR RINCÓN

Director FES COMUNICACIÓN

Proyecto de medios para América Latina y el Caribe
de la Fundación Friedrich Ebert

PERIODISMO:

Dícese de un oficio que hace reportería: busca fuentes, datos, documentos, contextos sobre las realidades y los convierte en historias. Dícese que es la práctica social que garantiza la libertad de expresión para ampliar la democracia. Dícese que trabaja por lo común y, por eso, molesta y escracha a los poderes. Dícese muchas más cosas, pero la clave es que sin periodismo de rigor no hay derechos, no hay democracia, no hay sociedad.

DERECHOS:

Dícese de eso a lo que tenemos derechos los humanos; esas cosas simples como la vida, la salud, la educación, la vivienda, la comida, el libre desarrollo, la libertad de expresión. Dícese que los derechos nos hacen más humanos, más igualitarios, más comunes porque nos guían en la convivencia y nos di-

cen eso tan bonito que es la dignidad de todos. Los derechos son como un detector de discriminaciones, vulnerabilidades y desigualdades en una sociedad de humanos.

SENTIDOS:

Dícese de los significados de las palabras, de los conceptos, de las conversaciones. Por ejemplo, la vida se respeta; la violencia contra las mujeres no está bien; la democracia es lo más poderoso porque significa que una comunidad se auto-regula en sus diversidades; el medio ambiente es la vida de lo no humano; lo bárbaro es discriminar por motivos de raza, género, lugar de origen, clase social; mejor esperanza que odio; mejor fiesta que miedos... y así, los sentidos son eso que como humanos inventamos y logramos para hacer más digna la vida en común. Y, también, los sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto como creadores de emociones e intérpretes de lo justo y lo poderoso.

SENTIDOS COMUNES:

Dícese de eso que es lo práctico y nos habita en la vida diaria, sus grices y sus sobrevivencias, eso que nos dice cómo sentir y actuar por usos y costumbres, eso que nos hace protegernos y ser conservadores, eso que pedimos para ser felices: eso de quiero comer, quiero que no me maten, quiero buena salud, quiero fiesta y amorcito. Eso de lo simple que muchas veces acude al destino de dios, el amor de la familia, el orgullo de la patria y la emoción de la tradición como seguros de ansiedad. De eso, de periodismo, derechos, sentidos y comunes va este libro, y de sus relaciones va este texto.

Y LLEGAMOS AL SIGLO XXI

Y llegamos al siglo XXI y los derechos fueron más y nos hicieron mejores humanos. Nos hicieron más conscientes de cómo los derechos nos hacen más libres y poderosos, y, también más exigentes: queremos muchas más vidas dignas. Los derechos significan la aparición en lo público de “los que no tenían” derechos. Entonces, los privilegiados de alta clase monetaria, alta *blaquitud*, alta *machirules* dijeron: ¡nos están invadiendo los subhumanos! ¡ellos quieren que compartamos nuestros privilegios! ¡Eso no puede ser! Y crearon la misión exterminio de esos “igualados” para que aprendan su lugar y no lo olviden jamás: son pobres, miserables, subhumanos. Esta operación de guerra clasista, racista, machista, xenófoba invocó a dios, patria, familia y capitalismo como mantras para mantener sus privilegios y su status quo.

Y llegamos al siglo XXI y el capitalismo triunfó: Si no tienes dinero, no existes. Punto. Amén. Se convirtió en dogma que el capitalismo es la victoria del yo, el yo, el yo hago dinero para consumir, exhibir y hacer lo que “a yo” me de la gana. Nace como ética universal el *yopitalismo*, ese capitalismo donde yo soy el centro de la sociedad: los demás son villanos a eliminar en el videojuego del capital. No importan derechos, democracias, los comunes: importo yo.

Y llegamos al siglo XXI y los derechos molestaban, jodían, exigían, visibilizaban a esos “otros” alienígenas e igualados, esos desechables del capital. Entonces, se creó la batalla cultural en nombre de las derechas (dios, patria, familia y propiedad) y en nombre de izquierdas (contra el neoliberalismo, por el pueblo y en nombre de yo). Esta batalla es contra los sentidos democráticos (los derechos) para ganar los sentidos

comunes (los miedos). Y para ganarla se usa a los chivos útiles (los periodistas) y a los amigos (los medios y redes). El resultado es que el periodismo se convirtió en prisionero secuestrado y abducido por estos machos-*yopitalistas* (digamos Trump, Bukele, Petro, Milei, Abinader...). Y por eso, los periodistas cínicamente vociferan sus tuits, debaten sus tuits, combaten sus tuits y se olvidaron de la gente y sus vidas y sus derechos.

Y llegamos al siglo XXI y la gente del común se fue de los medios y la democracia y se enclaustró en sus miedos y sus creencias. El periodismo se convirtió en el malo de la película. Y el *yopitalismo* de dios, patria, familia y propiedad ganó.

Y EN EL SIGLO XXI LOS DERECHOS MANDAN

Esa victoria de los machos *yopitalistas*, su cruzada moral en nombre del capital, ha encontrado en los derechos su resistencia. Porque el terreno común del siglo XXI son los derechos; nuestro destino humano común y progresista son los derechos, porque hemos constatado que **con derechos se vive mejor**. Los derechos se presentan como los héroes que pueden salvarnos en democracia, en lo colectivo, en la fiesta. Y precisamente porque los derechos son fiesta, más pueblo, otras estéticas y éticas, molestan y joden al *yopitalismo*.

No estamos perdiendo. Los derechos están ganando. Los derechos, el feminismo, el medio ambiente, las diversidades, los migrantes han invadido, literalmente, el castillo de lo establecido y los privilegios. No es metafórico, hemos invadido su fortaleza de privilegios. Ya estamos en centro, pasamos las murallas, nos metimos en su cabeza y política: los tenemos

hablando de derechos y feminismos y racismos y clasismos. El asunto político de debate son los derechos.

Su decisión ha sido la defensa de sus privilegios y por eso luchan contra los derechos, los feminismos, las otredades. Ahora que estamos en el centro, estos tipos nos miran y dicen: “nos están acabando, nos están cuestionando nuestros privilegios”, y comienzan a atacarnos, a matarnos: y eso es lo que está pasando, quieren eliminarnos. ¡Están asustados y reaccionan como fieras enjauladas!

“Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlos (...) vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, Cecilia Morel, esposa de presidente de Chile Sebastián Piñera, ante el estallido social del 2019.

La realidad es que ganamos la batalla por los derechos y los sentidos porque los tenemos hablando de feminismo, de diversidad sexual, de inmigrantes, de racismos. Los tenemos hablando de lo que queríamos que hablaran.

Pero como nos quieren matar nos declaramos derrotados. ¡No! Hay que luchar. Tenemos que cambiar la mirada: no estamos perdiendo, estamos ganando una batalla muy dura y larga. Es como un videojuego: ya entramos, estamos en estado de inmersión y nos atacan desde todos lados. Ya pasamos la fase 1: invasión: cuestionamos sus privilegios; la fase 2: infección, logramos políticas públicas; ahora, vamos a la fase 3: los derechos se toman los sentidos comunes.

Si ya atravesamos la muralla, tomamos el castillo y estamos en el centro mientras nos están mandando a matar por todos lados, necesitamos nuevas formas de luchar. Ahí, lo popular y

lo pop nos sirven de laboratorio, porque lo popular a lo Gramsci, Bajtin y Martín-Barbero no es un discurso, no es un contenido: es una manera de contar desde la experiencia de lo común vía el humor, el cuerpo, lo colectivo, la fiesta, el relato. Necesitamos esa activación popular de los derechos.

Y LA BATALLA CULTURAL ES POR LOS DERECHOS

La gran batalla cultural es, entonces, entre *yopitalismo* (libertad total para los negocios y el individuo) y **democracia** (bienestar social y trabajo por lo colectivo); entre un capitalismo que propone un individualismo de tener dinero para exhibirlo en el consumo, y una democracia que busca garantizar derechos para todos. El sentido común de las derechas liberales es luchar contra los derechos, porque el bienestar social y colectivo amenaza el éxito individual del yo: a los ricos con su yo les basta, los otros sobran o son sus enemigos. El sentido común de lo popular es lo colectivo y lo común, donde se goza, sufre y se lucha: para los pobres lo colectivo soporta, ayuda, acoge, protege.

La batalla cultural es por la información. Y la información construye percepciones y emociones. La batalla se hace con desinformaciones para crear percepciones y emociones de miedo, odio, asco y discriminación. La desinformación define nuestras realidades políticas y es muy efectiva porque emocionaliza, indigna, fanatiza y contagia.

Sabemos que la desinformación la crean los políticos, periodistas e *influencers* promoviendo los odios y los miedos como activadores del comportamiento tribal. Sabemos que es mucho más fácil activar emociones negativas que las positivas, como la esperanza, la empatía, el acoger.

Sabemos, también, que la desinformación no es un asunto de verdad, sino una estrategia política y de *marketing*. Las derechas saben que la política y el marketing más que contenidos o verdades, se juegan en lo estético, lo afectivo, lo narrativo y lo popular, como tácticas de seducción de encuentro con los sentidos comunes. Los discursos de extrema derecha son muy contundentes en la provocación emocional: muestran pocas razones, ninguna coherencia y huyen de la pedagogía para crear propuestas fast food mental, cargadas de emociones que habitan lo popular: las certezas en el destino de tu dios, tu familia, tu patria, tu capitalismo. Y los enemigos de tu yopitalismo, tu dios, tu familia, tu patria son los derechos y los feminismos. Por eso, sus consignas son vivas y habitan tu *yopitalismo*, eso que tú te ganas y te quieren quitar. Una lucha contra los derechos (lo *woke*, llaman) y contra todo lo que definen como progre (feminismos, ambientalismos, ancestralidades, identidades, sexualidades). Todo envuelto con mensajes-eslogan en estéticas y narrativas pop-populares, cercanas a la gente. Así, los políticos y dueños del capital usan la desinformación y las tácticas mediáticas, digitales y populares para dominar los sentidos comunes de la sociedad.

Mientras tanto los progres seguimos viendo la comunicación como un ámbito de alfabetización, educación, pedagogía e ilustración de los pueblos. Tal vez, debamos reconocer que la derrota de los discursos del progresismo está basada en que la derecha sí trabaja en cómo llegar a los sentidos comunes y exacerbar los prejuicios que tienen las gentes. Es más fácil asumir y comprender “a mi dios, mi familia, mi patria, mi capitalismo” que a unos derechos que nunca ha conocido, ni gozado, ni experimentado. Por eso es que el discurso de los derechos no ha bajado a los sentidos comunes; se quedó en los sentidos de los políticos, onegeros y académicos.

La comunicación de la derecha afirma y provoca, mientras el progresismo quiere explicar y educar. Son dos *call to action* totalmente distintos y ahí creo que estamos jodidos: nos provocan y nosotros salimos a explicar: “no, las mujeres no son el nuevo comunismo, porque el comunismo significó...” Nos falta más juego popular, más ironía juguetona pop. Ante una actitud tan estúpida como decir que el nuevo comunismo son las mujeres, lo que tenemos que hacer es burlarnos, ironizar, sacar el humor para demostrar la precariedad de esa provocación. A lo Fito Páez tenemos que tomarnos a “los enemigos a la altura del conflicto”. Ante la provocación cínica, el humor, por ejemplo.

Estamos llenos de diagnósticos: los progres tenemos la verdad, el análisis, los datos, los sentidos. Con soberbia decimos: esto es culpa del neoliberalismo, del colonialismo, del heteropatriarcado, del racismo, del machismo, del despojo, del extractivismo. Somos valientes en el diagnóstico, gritamos que hay que pasar a la acción, pero hay poco para proponer más allá de pedagogía. Y como no logramos conectar, decimos que nos están derrotando con la mentira, la manipulación y el odio. Y es cierto: compro todas esas verdades-diagnóstico, todas. Sin embargo, deberíamos analizar qué interpretamos e interpelamos desde categorías viejas que explicaban el pasado y otro modo de ser sociedad y cultura. No hemos sido capaces de comprender cómo luchamos y actuamos contra esos males de las derechas que tan claramente identificamos.

El diagnóstico está clarísimo, pero ¿cómo activamos? Cada progre académico se siente “muy politizado” denunciando radicalmente a través de cartas sin destino, eventos de gueto, libros y teorías sin lectores. Se habla de fascismos, se invita a volver a educar en democracia, de volver al humanismo y a la

modernidad. La solución es volvamos atrás. Nos falta pensar en futuros posibles y en futuros pragmáticos posibles. Nos falta contar en y desde lo popular. Nos falta jugar desde y en la *coolture*.

Y NECESITAMOS AL PERIODISMO HACIENDO PERIODISMO

Y ahí, necesitamos a los amigos periodistas para salgan de esa arrogancia blanca, masculina, occidental y religiosa de “dios, patria, familia y propiedad”, y empiecen a narrar desde las diferencias y las ambigüedades que nos hacen humanos y sociales. A contar cuidando el lenguaje para que no sea arma de discriminación y daño. Necesitamos un periodismo que se ponga del lado de la gente e informe para conversar sus sentidos comunes.

Necesitamos periodistas que enfrenten los miedos, los odios, el daño, la desinformación. ¿Cómo? Simple: haciendo periodismo. Diversificando fuentes, contar con base en datos y documentos, ofreciendo contexto y criterios para conversar en público. NO es tan difícil, es hacer periodismo. ¿Cómo? Abandonando X, que es la red tóxica de desinformación y odio donde hay poca ciudadanía común. ¿Cómo? Dejando de estar prisioneros de los egos/mentiras/abusos de los *yopitalistas* en el poder. ¿Cómo? Pausando o diluyendo su ego que estigmatiza, conspira y daña desde su superioridad moral. ¿Cómo? No amplificando los mensajes y voces del odio que promueven violencias y burlas cínicas de los derechos y sus causas sociales.

Señores periodistas, todo es más simple, si paramos nuestro ego, lo ponemos en pausa y hacemos periodismo.

Es posible informar en horizonte de derechos si partimos de la propia discriminación y odio recibido (porque hoy nos desprecian los políticos, intelectuales, empresarios, élites y hasta los comunes; ya casi nadie nos hace caso). Podemos informar en horizonte de derechos si, antes de informar u opinar, pausamos (y ojalá eliminemos) al troglodita moral que llevamos dentro; si autocríticamos al machirulo que está con nosotros; si aprendemos de las mujeres que están mostrando cómo hacer un periodismo más digno, con horizontes de lo común y del cuidado.

Los periodismos en derechos y para los sentidos comunes buscan pasar de las narrativas del odio a las de la dignidad y futuro; diluir el moralismo maniqueo de buenos y malos para producir la confianza en el otro y tejer colectivo; interpelar al ciudadano para activarlo a través de los derechos; y asumir el mandato de la convivencia entre diversos. Y lo más importante: la autocrítica sobre nuestro papel en los odios y miedos públicos: lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Ese autoanálisis de ese “nosotros” de los buenos morales.

El periodismo y los medios no podemos abdicar de nuestro oficio de dudar, investigar y ser contra-poder, pero eso no implica abandonar el contexto y verificar los hechos. Por lo tanto, debemos **cuidar el lenguaje**, porque las palabras son balas que matan; conversar con **los otros puntos de vista**, porque nadie tiene toda la razón ni toda la verdad y entre todos sabemos mejor; **diversificar las fuentes**, los expertos, los análisis; contextualizar los sentidos porque **sin contexto no hay verdades ni derechos ni democracia**; desmovilizar a los guerreros de la palabra. Hay que producir unos medios de comunicación que nos lleven a **pasar de las ciudadanías del miedo** como dice Susana Rotker, **a las ciudadanías de la esperanza.**

LOS DERECHOS SON FIESTA

Los sentidos comunes son esos de la resistencia-sobrevivencia-sumisión-lucha. Todo en simultáneo: revolucionarios y sumisos, amorosos y odiadores, solidarios y discriminadores, creyentes del destino y dios, pero creadores de vida y comunidad, amadores de familia y patria porque es lo único que se tiene, aunque la patria no llegue y en la familia se peleó mucho. No podemos buscar una higiene política o conceptual: se es muchas cosas al mismo tiempo.

Los sentidos comunes, esos de la pragmática popular, son más hermosos y vitales en sus formas de celebrar la vida: la fiesta, el encuentro común, las alegrías del baile, el humor como crítica social, el poner el cuerpo en todo lo que se hace, contar chismes, historias, aprender de los que saben por experiencia. Estas prácticas y saberes debemos activarlas para hacer de los derechos nuestro mandato común.

Si queremos ganar la batalla cultural por los derechos humanos, debemos conectarlos con lo popular. Y para eso debemos contar/narrar/testimoniar lo poderosos que son los derechos, que son nuestro superpoder en democracia; ponerles el cuerpo, bailarlos, alegrarlos, humorizarlos: sacarlos de la solemnidad discursiva de los expertos y llevarlos a la espontaneidad alegre de nuestra gente. Habitar esa verdad de que con derechos se vive mejor.

Y ESTE LIBRO-TESTIMONIO

“Es justamente de estas personas, de los “nadies”, “esos” desechables, sin destino, “esos” que nos reflejan en sus

dolores y alegrías, de “esos” es que se ocupan las historias de este libro”, dice la editora Natalia Arenas. Y eso es lo poderoso de los relatos: están llenos de humanidad, de esos que se luchan la vida pan a pan.

“Mi felicidad son mis hijos, me gusta compartir con mis amistades. Yo vivo mi vida bien”, explica Rosa quien no existe formalmente ni para Haití ni para República Dominicana. Este modo bonito de asumir la vida a pesar de la política de “desnacionalización” que la afecta, es lo que no podrán matar los racistas del mundo. “Este cuerpo lo eché yo aquí, no en Haití”, afirma.

Kelvens Volcy con tono de voz muy bajo dijo: “Kouri pou lapli, tonbe nan larivyè”. Algo así como “huir de la lluvia para caer en el río”. ¡Sin palabras! La contundencia de no tener casa para vivir.

La historia de Elsa: “Desde entonces, ya no eres la misma: dependes de tu esposo y tus dos hijas, tu principal red de emergencia, no por elección, sino porque el sistema de salud mental de tu país te ha fallado”. Y no está loca.

Un país donde la experiencia no cuenta: “Doña María de la Cruz, con sus 93 años a cuestas, es uno de esos rostros que el país se niega a mirar”. Y otra, doña Rosa, 89 años, dice: “Ya ni siquiera me preguntan si tengo hambre o frío”. Cuerpos que dieron todo, ahora desechables para el Estado y el Capital.

“Esto no se aprende con la cabeza, sino con la barriga. Me detienen porque creen que como soy negra, soy haitiana. Pero esto es mío. Esta es mi cultura. Yo compongo mi salve, la creo desde el corazón. Eso no me lo pueden quitar”, cuenta Corina. Pura identidad afro, muy dominicana, puro sabor de estas tierras y mares.



Este es el viaje que propone este libro, que comienza con el dolor de no estar, sigue con la incertidumbre de no habitar, se pierde en la locura y la vejez, y vive en la música como lugar afro que salva el alma del racismo y de la persecución.

Bogotá, Colombia, agosto 27, 2025





INTRODUCCIÓN

NATALIA ARENAS

Editora y periodista colombiana

Los periodistas estamos acostumbrados a cubrir a los poderosos: a los importantes, a los famosos, a aquellos – casi siempre hombres, casi siempre blancos–, cuyas vidas y decisiones, nos decimos, definen el devenir de nuestros países. Los temas también tienen que ser “serios”: la Política, la Economía, la Justicia, la Historia, así, con mayúsculas. El tono debe ser de desastre, caos, denuncia, grito. Poderosos solemnes y mundos desastrosos son el foco sobre el que gravitan nuestras redacciones, “eso” que repetimos que *es* noticia. De los demás, del resto, de la vida que se ocupen otros: los alternos, los independientes, los populares o los sensacionalistas. Y si alguna vida de un marginado llega a la gran prensa es porque está atravesada por la catástrofe, “por las distintas formas de la muerte”, como dice Martín Caparrós: “porque sin desastre, la mayoría de la población no puede (ni debe) ser noticia¹”.

1. Caparrós, Martín. “Por la crónica”. Congresos internacionales de la lengua española. Cartagena. 2007.

Pero al periodismo, y sobre todo a *ese* periodismo, le falta calle, cotidianidad y paciencia. Le falta reconocer que en momentos de crisis de los medios y del periodismo –como la que estamos atravesando ahora y que es una crisis de confianza y de credibilidad y de financiamiento, las tres al mismo tiempo– tenemos que contar historias que promuevan sentidos comunes, que se encuentren con la gente y sus vidas. Que ayuden a que como sociedad encontremos espacios compartidos en los que podamos dialogar, controvertir, divertirnos, sufrir, imaginar entre distintos para fortalecer nuestras democracias.

Este libro propone que ese terreno común sean los derechos porque los derechos son las pautas para la convivencia social de las personas, para reconocer y proteger la dignidad de todos y para que todos nos podamos desarrollar de manera integral. Los derechos nos vuelven ciudadanos y nos unen, nos igualan. Los derechos –y ponerlos en práctica– nos ayudan a reconocer las discriminaciones, las vulnerabilidades y las desigualdades que nos dividen, que nos separan. Esas que hacen que algunos de nosotros no existamos, no aparezcamos en el mapa. Que seamos más vulnerables a la tragedia. Pero a su vez, los derechos son “eso” que nos ha hecho mejores, más diversos, más bonitos como colectivos. No es una queja, no es un reclamo: es un testimonio de que con derechos se vive mejor.

Es justamente de estas personas, de los “nadies”, “esos” desechables, sin destino, “esos” que nos reflejan en sus dolores y alegrías, de “esos” es que se ocupan las historias de este libro:

De los indocumentados como Rosa Ramírez², la protagonista de la primera historia, que a pesar de haber vivido casi toda su vida en República Dominicana no existe para ese país, y tampoco sus hijos. Es la historia de muchos que, como ella, solo encontraron un hogar en los bateyes, donde la falta de reconocimiento legal no es un accidente, ni un problema técnico, sino el resultado de una política de exclusión que lleva décadas consolidándose. A pesar de que fue con la fuerza de trabajo de los cuerpos que ahí viven que se construyó buena parte de la riqueza de la isla. No nos gustan “esos”, pero son quienes nos construyen, esa es la paradoja.

También de aquellos que cumplen la doble condición de ser negros y haitianos, como Kelvens Volcy, protagonista de la segunda historia de este libro. Personas que pueden venir a este lado de la isla a trabajar, pero no a vivir, como si algo así fuera posible. Por eso son echadas de los cuartos que arriendan para sobrevivir, a pesar de que no existe ninguna ley que justifique esos desalojos racistas. Por ahora, lo único que hay es una intención expresada públicamente por el presidente de la República Dominicana, anunciada en una alocución el 6 de abril de 2025, que sin embargo ya se traduce en operativos de persecución y en un clima de miedo alimentado por el discurso oficial contra la población migrante haitiana. Y saber que el odio es un sentimiento que daña más a quien lo siente que a quien lo recibe, porque quien lo lleva dentro carga con una vida miserable al convivir con ese odio todos los días.

O a los que el estigma social isleño **condena de “locos” o castiga por “tristes”**, que en República Dominicana es sinónimo

2. Nombre cambiado por seguridad.

de debilidad. Esto, en el país con mayor carga de trastornos mentales de Centro América y el Caribe, según un estudio de IQVIA, una firma internacional especializada en investigación y análisis del sector salud. Aquellos que, como Elsa Quintana, la protagonista de esta historia, tienen que depender totalmente de sus familias mientras ellos insisten una y otra vez en buscar atención en un sistema de salud que los abandona, los revictimiza y los somete a costos imposibles. Al final el cuerpo siente, todos los cuerpos sienten, y en ese sentir todos somos iguales. Nos pasa a todos, no sirve el dinero, solo los cuerpos.

Igualmente se ocupan de **los más viejos** que, en el mejor de los casos, son invisibilizados por sus familias y convertidos en fantasmas y, en el peor, sufren maltratos, abandono y abusos. La cuarta historia refleja cómo se vuelven prescindibles porque no trabajan ni producen dinero, como si la dignidad tuviera fecha de caducidad. La experiencia es sabiduría habitada, y en un capitalismo de eres lo que produces, pareciese que muriéramos en vida. Nos perdemos lo vivido y eso no lo puede remediar el capital.

La quinta y última historia de este libro se ocupa de otro gran tema que suele marginar la gran prensa: la cultura popular que, en República Dominicana tiene nombres, y **sabores y sonidos propios**. Los palos, el gagá, la salve, el congo, la zarandunga, el bambular. Todos ritmos nacidos del sincretismo, de las comunidades negras que, desde la colonia, sobrevivieron a la esclavitud y a la exclusión, como cuenta su autora. Ritmos que tienen siglos de existencia pero han sido relegados por el racismo, por la ignorancia y por una política cultural que los considera "folclor" pero no arte. Y que aún así, han sobrevivido en la isla que fue llamada La Española mucho más que los sonidos "cultos" que impuso la colonización. Porque la cultura

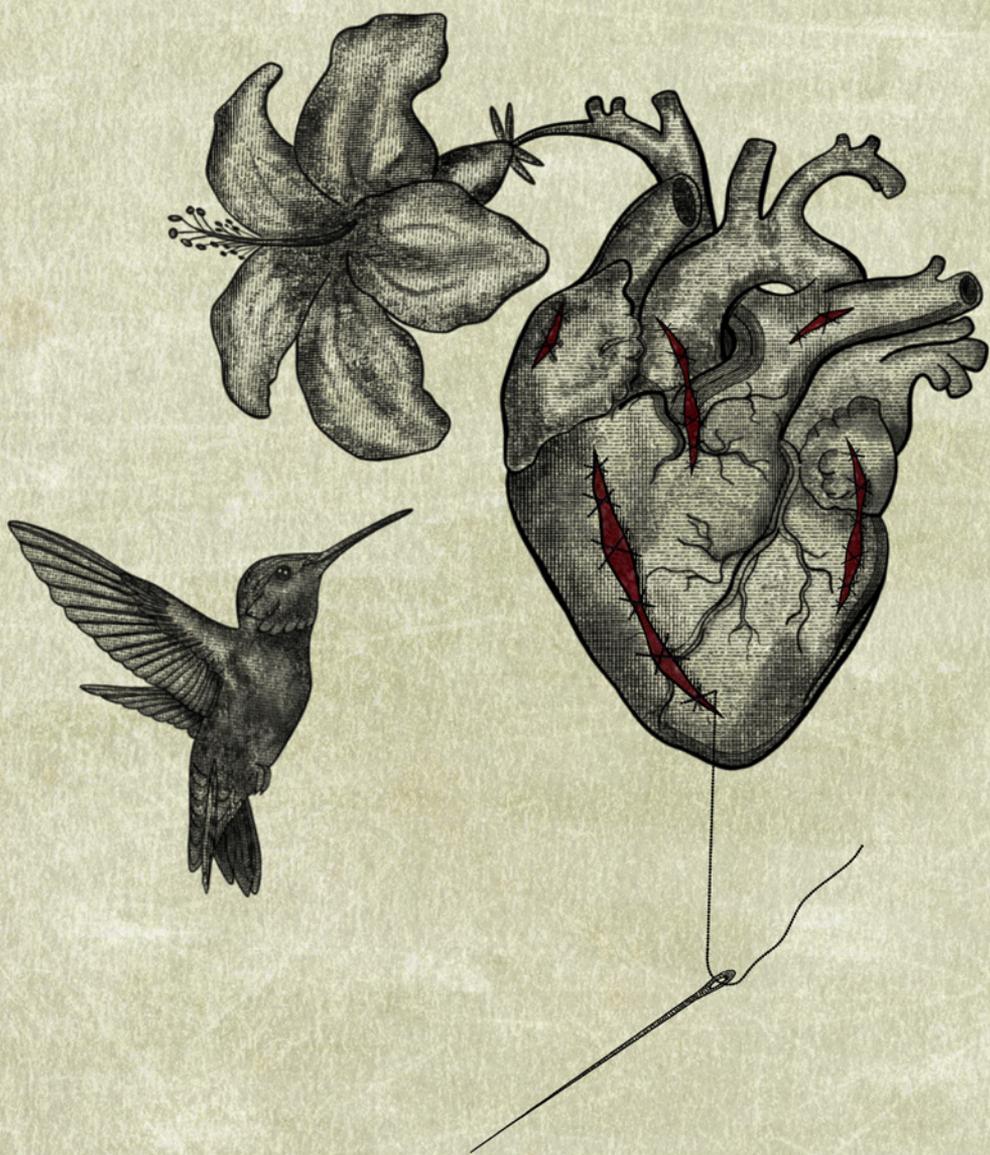
es resistencia. Y sin fiesta, músicas y bailes no existe esta isla bendita, así como desde los goces somos, así es la esperanza en los derechos.

No son historias de lamentos, dijimos, y aun así salieron quejas, radicales, bravas. Porque eso somos: cuerpos que gritan, que viven con lo que tienen y como pueden, pero que no se dejan. Vivimos, gritamos, existimos. En los gritos que atraviesan estas cinco historias hay vidas, hay derechos buscando un destino, y también fiesta.

Los latinoamericanos somos así. Nos excluyen, nos maltratan. Nos quejamos, sufrimos, nos dolemos. Pero siempre —sin importar cómo ni por qué— el cuerpo lo sabe, y al final del día queremos irnos de fiesta. Porque lo que somos habita en nuestros cuerpos, en nuestras voces, en nuestros tambores. Porque también nos une ese sentimiento irrenunciable de **bailar nuestros dolores**.

Por eso este libro se llama “Terreno común: los derechos tienen que ser fiesta”. Porque como periodistas queremos cambiar la mirada y narrarnos distinto. ¡Esa es la manera de volver a ser indispensables! Ser periodistas que habitamos nuestros cuerpos y subjetividades, no sólo para sobrevivir, sino para gozar y reconocernos como somos, contar historias y contarnos. Para conectar y que todos, poderosos o no, famosos o no, blancos o no, hombres o no, sepamos que tenemos derechos y que merecemos que se cumplan para que vivir en democracia sea una verdadera fiesta.

Si los derechos no nos ponen a contar mejor, no seremos mejores periodistas.



LOS CUERPOS QUE SOSTIENEN EL PARAÍSO:

TRABAJO SEXUAL
Y APATRIDIA EN EL BATEY

 Por Ignacio Juan Vázquez Carneiro
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Desde que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunciara el pasado 2 de octubre de 2024 un plan para expulsar a 10.000 haitianos indocumentados por semana, la vida de Rosa Ramírez —nombre ficticio utilizado para proteger su identidad—, una mujer de ascendencia haitiana y residente del batey de Bienvenido, en Santo Domingo Oeste, cambió de forma drástica. Hasta entonces, Rosa mantenía a sus tres hijos de 8, 11 y 16 años vendiendo alimentos en la vía pública. Con el aumento de las redadas y el clima de persecución, el miedo a salir se intensificó y la ausencia de documentos dificultó cualquier posibilidad de regularizar su situación migratoria.

Rosa no existe formalmente ni para Haití ni para República Dominicana. Tampoco sus hijos. “Realmente he intentado tener mis documentos, pero se me ha complicado, no he tenido la suerte. Mis hijos no tienen nada, solo el acta de nacido vivo”. Aunque el padre de los niños es dominicano y tiene documentos, Rosa no puede registrarlos sin su autorización, y él se la ha negado sin darle una explicación clara. A pesar de ser su madre, no puede completar el proceso por sí sola porque carece de documentación que acredite su identidad ante el Estado, ni en Puerto Príncipe ni en Santo Domingo. Así, la apatridia se hereda, en silencio, como un estigma. Nacer se convierte en crimen.

Se crió en Hato Nuevo y desde los 13 o 14 años vive en el batey Bienvenido. Allí, sin documentos, sin familia extendida y con tres hijos que dependen por completo de ella, ha intentado construir un hogar a pesar de las condiciones más adversas. “Mi felicidad son mis hijos, me gusta compartir con mis amistades. Yo vivo mi vida bien”. Prepara a sus hijos para la escuela y luego, sin un trabajo formal ni un ingreso estable,

recorre el barrio en busca de cualquier tarea doméstica que le permita alimentarlos. “Si veo a cualquier persona que esté fregando, yo voy y le digo ‘voy a ayudarte’... entonces me da un plato de comida, me dice ‘toma, 100 pesos’ (unos 1,69 dólares americanos), y con eso cocino algo. A veces nos acostamos sin cenar”.

Con la persecución migratoria, el miedo pasó a ser parte de su cotidianidad. “Tuve temor de que me llevaran, es un país que es mío, pero no estoy acostumbrada allá [en Haití], yo nací allí pero no sé nada de allá... toda mi vida es aquí y voy a sentirme extraña allá”. Si la detienen, teme por sus hijos: “¿Con quién se van a quedar, si me tienen a mí?”. Hasta el momento, según afirma, no ha tenido ningún episodio con las autoridades, pese a que el temor a que entren en cualquier momento en el batey se extiende entre la población y las noticias de deportaciones arbitrarias abundan en la prensa.

La historia de Rosa, y de tantas mujeres como ella, no ocurre en el vacío. Tal como documenta el informe realizado por la académica Natalia Riveros para el Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA) titulado “Estado de la cuestión de la población de los bateyes dominicanos en relación a la documentación”, los problemas actuales de apatridia, precariedad e invisibilidad que afectan a los descendientes de migrantes haitianos tienen raíces profundas en la historia de la industria azucarera dominicana.

Los bateyes, concebidos originalmente como alojamientos temporales para los braceros –trabajadores agrícolas, generalmente haitianos, que realizan labores mal remuneradas, sobre todo en la caña de azúcar– se convirtieron

en comunidades permanentes marcadas por la exclusión. En estos espacios, donde generaciones enteras han nacido sin papeles, la falta de reconocimiento legal no es un accidente: es la herencia de un modelo económico extractivo y racializado, donde el trabajo era necesario, pero nunca la ciudadanía.

La industria azucarera –motor de la migración haitiana a República Dominicana durante la época del dictador Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961)– asentó a miles de familias en bateyes. Estas comunidades se construyeron sobre la necesidad de mano de obra barata y la negligencia institucional. Este proceso se configuró por la combinación de varios elementos: por un lado, la demanda constante de mano de obra haitiana para la caña, promovida sobre todo por empresas estatales. A esto se le suma la alta tasa de subregistro de nacimientos que ha caracterizado históricamente a la República Dominicana, junto con la debilidad institucional del registro civil, marcada por la falta de supervisión y el riesgo de falsificaciones.

En este contexto, el trujillismo fomentó un discurso de odio hacia la población haitiana. En ese periodo se difundió la idea de que las personas con “apariencia o nombre haitiano” poseían documentación ilegítima, y el registro civil aplicaba criterios arbitrarios para negar inscripciones, basándose en el perfil racial o incluso en el acento de los padres.

Las distintas etapas del marco legal migratorio –desde los acuerdos binacionales de contratación hasta la Ley de Migración de 2004 y las resoluciones administrativas posteriores– han consolidado un régimen de exclusión. Esa ley estableció que los hijos de migrantes en situación

irregular no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, al considerarse que sus padres están “en tránsito”, incluso si nacen y crecen en el país. Resoluciones posteriores permitieron suspender o anular documentos de identidad basándose en supuestas irregularidades administrativas, lo que organizaciones civiles han denunciado como una “política de desnacionalización”.

Como explica el informe de OBMICA, incluso personas nacidas y residentes toda su vida en territorio dominicano han visto suspendidos sus documentos o negados sus derechos por criterios administrativos arbitrarios. En los bateyes hasta un 33% de los mayores de 16 años carecen de cédula y más del 22% no tienen acta de nacimiento. La política de “desnacionalización” ha afectado a miles, cerrándoles el acceso al empleo, la salud, la educación y la justicia, y perpetuando la pobreza estructural de los bateyes. Esta situación no solo priva de ciudadanía, sino que también erosiona la dignidad y la esperanza de quienes la viven día a día.

El testimonio de Rosa revela las lógicas estructurales que, durante décadas, han sostenido un orden profundamente desigual. Su testimonio muestra lo que ocurre cuando el Estado ausente se combina con un legado institucional que ha excluido deliberadamente a quienes construyeron, con sus cuerpos, la riqueza del país. La indocumentación no es un problema técnico: es una forma de violencia estructural con raíces coloniales y consecuencias intergeneracionales.

EL PRECIO DE LA INVISIBILIDAD:

SOBREVIVIR EN LOS MÁRGENES

“A veces tengo que hacer cosas... salir a la calle, madrugar, estar con un hombre... para darle algo a mis hijos”, dice Rosa con la voz entrecortada, con lágrimas. “No es una vida fácil. A veces uno sale con personas que abusan de uno, que se acuestan con uno y no le pagan. Uno sale arriesgándose la vida. Tengo que salir y dejar a mis hijos durmiendo. Tengo temor de no volver y que les pase algo.”

Ya le pasó al mayor, de 16 años. Lo apuñalaron mientras ella salía a buscar el sustento nocturno. Le perforaron el pulmón y tiene dificultad para respirar, pero sobrevivió gracias a la ayuda de vecinos y a una cirugía de urgencia en una clínica de Villa Mella. “¿Qué será si yo no llego a tiempo la próxima vez?”, se pregunta.

Salir a la calle es una ruleta. Algunas veces consigue dinero; otras, comida; otras, solo miedo. “Hay personas que te apuntan con un arma, que te dan golpes. Es difícil. No puedes violentarte porque si lo haces, te matan. Tienes que cogerlo y venirte para tu casa. Y dar gracias de que estás viva”. Los riesgos son constantes: violencia, impunidad... “Uno se está arriesgando con una enfermedad. Yo le ruego mucho a papá Dios que no me deje coger una, porque el día que yo caiga en una cama no sé qué será de mis hijos”. Aun así, lo repite una y otra vez: no quiere esta vida. Anhela un espacio seguro, un techo propio, documentos que le permitan trabajar y acceso a servicios básicos. Lo esencial.

La vida de Rosa se define por la urgencia y la improvisación. Nada está garantizado. Su casa cuesta 3.000 pesos al mes,

unos 50 dólares. Es una estructura de paredes de zinc y madera pintadas de un azul desgastado, con manchas de humedad que delatan las filtraciones cada vez que llueve. La luz entra parcialmente por una cortina de tela fina con rayas azules y beige, que apenas separa lo público y lo íntimo.

En una de las paredes cuelga una pintura colorida que retrata un paisaje rural con casitas de madera y árboles intensos, una imagen llena de vida y orden que contrasta con el espacio real. Frente al cuadro, una silla oscura y desgastada marca el inicio de un entorno dominado por el paso del tiempo: muebles ajados, sillas que crujen al sentarse, una mesa con mantel deshilachado y una pata rota. A un costado, una estufa improvisada descansa sobre una bombona de gas descascarada, rodeada de platos, vasos y utensilios en una palangana plástica. En ese mismo rincón asoman ollas y un horno que ya no funciona. “Tengo una lavadora, pero no sirve. Tengo que lavar en casa ajena. Usted está sentado ahí en ese sillón y eso no sirve, esto no sirve”.

El entorno habla de carencia, pero también de una voluntad de mantener el hogar en pie a pesar de los límites. Cada objeto, aunque vencido por el uso, sigue cumpliendo una función; cada rincón revela el esfuerzo de Rosa por sostener una vida digna en condiciones que constantemente la desafían.

“Hoy me levanté y no he cocinado a mis hijos. Salí por ahí y compré 100 pesos en tostadas, le di a cada uno. Hasta ahora no he cocinado. Hoy no he prendido la estufa. Si me caigo de ánimo, me acuesto como hoy. Cuando Dios quiera, yo como”.

En medio de la precariedad, Rosa insiste en cuidar sus vínculos. Se esfuerza porque sus hijos cenén, vayan a la escuela,

se diviertan. “Cuando estoy con mis hijos, eso es lo más importante del mundo. Nos reímos, jugamos a tirarnos, a hacernos cosquillas. El más chiquito me dice: ‘Mami, te quiero’. Al hablar del regalo que recibió en el Día de las Madres, se emociona, su hijo mayor salió temprano a trabajar para conseguir 300 pesos (unos 5 dólares) y regalarle algo. “Él es muy atento. Eso fue lo que me trajo. Fue un regalito, pero fue mucho para mí”. El regalo: una cajita envuelta en plástico con dibujos de corazones rojos, contiene gominolas y un pequeño peluche de un osito.

Rosa no se victimiza. Reconoce sus límites, pero también su resistencia. “Yo no tengo quién me dé, todo lo tengo que buscar yo. Todo soy yo para mis hijos. A veces quisiera un trabajito correctamente para yo no hacer cosas que no quisiera. Yo no pido mucho. Solo quiero tener un techo mío y no tener la preocupación de pagarlo cada 15 días. Yo, teniendo un techo mío, sería la mujer más feliz del mundo”.

No está sola en esas calles. Sale con otras mujeres del batey, mujeres con las que ha crecido, compartido. Pero su situación no es igual a la de ellas. “Nosotras somos amigas desde hace mucho. Algunas tienen su esposo, su trabajo, tienen qué comer. Ellas lo hacen porque quieren, por diversión. Pero yo tengo que hacerlo por necesidad. [...] No quisiera decir que es envidia, pero todas tienen su esposo que les da su diario. Tienen su casa. Yo solo quiero tener a alguien que me ayude a diario. [...] No pido nada más”

En algún momento intentó salir de la calle. Montó un puesto de frituras, pero los clientes le “quedaban mal”. “Tenía una vitrina y se me rompió. Lo dejé porque no tenía cómo

comprar otra. Para pagar este techo, tengo que coger mucha lucha”.

La historia de los bateyes está atravesada por relaciones de poder profundamente desiguales. Durante décadas, muchas mujeres y niñas que llegaban –sobre todo jóvenes y sin documentos– han sido percibidas como “disponibles” para quienes detentan autoridad. Jefes del ingenio, militares o hombres con alguna cuota de poder las han escogido, acosado y, en no pocos casos, abusado de ellas sin enfrentar consecuencias. En los años más duros del azúcar, había trabajadores que, al negarse a que su hija o su esposa fuera tomada por un jefe, se arriesgaban a perder el empleo o ser expulsados del batey. Aunque el tiempo ha pasado, las huellas de esa violencia persisten.

Las consecuencias de no tener documentos la atraviesan por completo. No puede acceder a salud, a educación formal, a asistencia estatal. Tampoco puede desplazarse libremente. “Tengo miedo. No puedo ir a un hospital si mis hijos se enferman. Tengo miedo de que me arresten, de que me manden para Haití. Pero yo no sé para dónde iría... nunca he ido. Yo vine chiquita, con dos años. Tengo 31. Nunca he pisado Haití. Mis hijos nacieron aquí”.

La falta de papeles es un castigo heredado. Un limbo que atrapa, una etiqueta que justifica el abuso, la indiferencia. Muchas mujeres como Rosa, al no poder inscribirse en ninguna parte, quedan fuera del sistema y más expuestas a redes de trata, explotación o simplemente al cansancio de la vida diaria. En los bateyes, la oferta de trabajo sexual encuentra siempre demanda. La cultura “cañera” ha naturalizado el pago por sexo como parte de la rutina de los hombres.

Mientras tanto, mujeres como Rosa arriesgan el cuerpo cada noche. No por elección, sino por hambre.

LA VOLUNTAD FRETE AL PESIMISMO

“Este cuerpo lo eché yo aquí, no en Haití. El gobierno me ha privado de tener un espacio aquí. Aunque sea para limpiar el ayuntamiento, yo quisiera trabajar. Pero tengo miedo de salir y que me lleven”.

Hoy, Rosa sobrevive entre el cansancio, el miedo y una esperanza que se niega a desaparecer. Su cuerpo ha sido su única herramienta de subsistencia, pero también el espacio donde ha cargado el peso del abandono institucional y la violencia patriarcal.

En medio del abandono institucional, ha florecido una red de solidaridad barrial que sostiene su vida. Bienvenido es también un lugar de redes informales de cuidado, de vecinas que, sin promesas, se sostienen unas a otras para no dejarse caer. Le dan tareas, le comparten comida, le pasan la leche para los niños. Es esa misma comunidad la que la ayudó a pagar los más de 40.000 pesos (unos 670 dólares) del hospital cuando apuñalaron a su hijo. “Yo me estaba volviendo loca. Me di duro en la pared. Yo decía: ‘Dios, me van a dejar presa’. Pero como yo no soy mala gente, los vecinos me ayudaron. Me dieron 300, 500, 1.000 (16 dólares). Papá Dios me ayudó”.

En los márgenes del Estado, donde la legalidad no alcanza y las políticas públicas fallan en garantizar derechos básicos, la vida persiste gracias a los lazos humanos que las instituciones han

roto. En esa vida compartida habita una forma de esperanza que no depende del asistencialismo ni de la caridad, sino de una ética barrial de resistencia y cuidado mutuo donde Rosa encuentra fuerza para organizar su día, asegurarse de que sus hijos cenén, jugar con ellos cuando puede e improvisar desayunos con pan y jugo. Se niega a resignarse y hasta ir a la iglesia se vuelve una forma de mantenerse fuerte emocionalmente: “Voy a veces los domingos. Hay una aquí atrás. Soy evangélica”. Su fe es una constante. “Dios sabe. Dios es bueno. Yo no pierdo la fe”.

A pesar de la visión común que presenta a las mujeres de los bateyes como dependientes o meramente víctimas, estudios como el de Jansen y Millán (“Género, trabajo y etnia en los bateyes dominicanos”) revelan otra realidad: mujeres que lideran hogares, participan activamente en la economía informal y sostienen la vida comunitaria. El 71.6 % de las mujeres entrevistadas reportaron ingresos propios, y muchas de ellas son jefas de hogar, desafiando los estereotipos que las reducen a esposas o trabajadoras sexuales.

En palabras de Rosa: “Quisiera por lo menos poder ponerme a vender lo que sea... pero el dinero aquí no lo permite. Pero cuando papá Dios quiera, me lo dará. Aunque sea un pedacito de papel para yo ponerme a trabajar”. Y también, cuando el país quiera —cuando decida verlas y reconocerlas—, tal vez ella, y tantas otras, puedan finalmente vivir.



PROHIBIDO ALQUILAR:

**LA VIVIENDA COMO HERRAMIENTA
DE DISCRIMINACIÓN SOCIAL**



Por Melvin Julio Mateo
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

“Lespwa fè viv”, la esperanza da vida. Con este refrán comenzó nuestro diálogo, alrededor de las 10:00 de la mañana. Era lunes 12 de mayo, lo recuerdo bien: ese día Kelvens Volcy debía entregar el lugar donde vivía, una habitación de aproximadamente 10 metros y sin ventanas en la que solo cabían él, la cama, dos sillas plásticas, una mesa, un espejo y sus pocos objetos personales.

Acomodaba su ropa, zapatos, artículos de aseo, sábanas y toallas en tres cajas de cartón. Mientras tanto, murmuró con tono de voz muy bajo: “Kouri pou lapli, tonbe nan larivyè”. No entendí lo que decía, pero me escribió la frase en el traductor de Google: “huir de la lluvia para caer en el río”.

Momentos después comprendí que aquella expresión que era la que mejor describía la situación que atravesaba.

Confesó que volvería a Cité Soleil. Por el nombre, imaginé que se refería al lugar más exclusivo de su país, pero no. “Cité Soleil o la Ciudad del Sol”, es uno de los sectores más peligrosos de Haití.

“¡Yo vine a aquí a trabajar!”, pronunció, e inmediatamente escuché otra vez el tono temeroso de su voz. Continuaba recogiendo sus pertenencias y me explicaba que debía desocupar el lugar antes de las seis de la tarde.

Lo observé, y me dijo que no podía esperar a que Migración lo detuviera y lo subiera al autobús blanco, más parecido a una cárcel móvil y comúnmente llamado “camiona”, utilizado por la Dirección General de Migración (DGM), para transportar haitianos.

Y es que desde el 6 de abril de 2025, el presidente Luis Abinader, que se proclama a sí mismo de “mano dura” contra

la inmigración haitiana, anunció una serie de medidas tras la intervención militar en el sector de Mata Mosquito, provincia La Altagracia.

Se trata de un área segregada en el que la mayoría de sus habitantes son de origen haitiano. Lo llaman “gueto” o “el pequeño Haití” y su crecimiento produjo que miles de dominicanos exigieran a las autoridades el desalojo de las casi 500 familias que vivían allí en construcciones de zinc y madera. La autoridad migratoria, en coordinación con Policía y Ejército, destruyó sus casas y negocios y capturó a más de 500 personas para repatriarlas.

“Quien facilite el tráfico irregular de personas deberá enfrentar las consecuencias. Y queremos que estas consecuencias sean las más drásticas”, advirtió Abinader en su alocución presidencial.

Una de esas medidas busca reformar el marco legal migratorio del país para establecer sanciones “duras” en contra de propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular, una medida que hoy no está prevista en la ley. El presidente dominicano pidió a los haitianos indocumentados “marcharse voluntariamente o serán deportados”.

La mirada de Kelvens se plantó en la puerta por la que tendría que salir en pocas horas. “Aquí solo quieren tratar haitiano mal”, dijo. “Dominicano no puede tratar haitiano así. Tenemos diferente color, pero la misma sangre rojo”.

Se sentó en la orilla de su cama. Le pregunté en qué pensaba y respondió que tenía miedo. Su cuerpo reflejaba la tensión de no saber qué hacer después de desocupar la que había sido su casa por nueve meses: una habitación de madera y aluzinc

ubicada en Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, un sector conocido por ser densamente poblado y pobre.

De repente, le brotaron dos lágrimas: primero del ojo izquierdo y luego del derecho. Sus ojos negros seguían clavados en la puerta. “Bondye mwen, ban mwen fòs”, murmuró. Le pedía fuerzas a Dios.

Según datos oficiales, durante el primer trimestre del 2025 fueron deportados más de 86.000 haitianos.

Eran las 11:30 de la mañana. Ninguno de los dos había desayunado. Solo había visto a Kelvens recoger su ropa y otros artículos, guardándolos uno a uno, con un cuidado casi obsesivo, en las cajas de cartón.

El día avanzó aunque dentro de la habitación se percibiera lo contrario. Kelvens no tiene hijos, pero llegó a la República Dominicana con el sueño de ayudar a su familia. Mientras narra los motivos que lo trajeron a esta parte de la isla hizo una pausa y enseguida se escuchó un silencio.

“Llegar a Saint-Domingue (Santo Domingo) es el sueño de muchos haitianos”, dijo como si se tratara del “sueño americano”. Su pausa lo reafirmó. “Dominicano piensa que es fácil vini aquí”, señaló el joven negro de 24 años. Su travesía para llegar hasta la comunidad de San Miguel fue realizada por Malpasse, que da acceso por la provincia Independencia, y que es uno de los cuatro pasos fronterizos que hay entre los dos países.

Contó que, desde los anuncios de Abinader, no ha podido dormir. Guardó silencio al tiempo que se escucharon los pasos de alguien que se acercaba a la habitación. Era su casero, un hombre alto y corpulento, que lo saludó amablemente, le pidió

que no le pusiera candado a la puerta al salir y luego se retiró. Parecía venir a comprobar que Kelvens realmente se estuviera yendo, aunque me dio la impresión de que su estancia fue breve precisamente porque se percató de que su inquilino no estaba solo.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes de la República Dominicana de 2017 reveló que en territorio dominicano hay 750.000 haitianos, alrededor del 7% de la población total del país. La misma encuesta indica que tres de cada cuatro inmigrantes que se mudaron a República Dominicana lo hicieron buscando mejores condiciones laborales, y que lo primero que hicieron al llegar fue buscar un empleo. La encuesta revela también que nueve de cada diez extranjeros que viven en el país son de origen o nacionalidad haitiana.

“Sin casa no puedo estar aquí”, dijo el joven que trabajaba como ayudante pelando pollos en una carnicería. “Vine a Dominicana a buscar mejor vida. “No quieren alquilar casa a negro haitiano. Si eres blanca sí, pero si eres prieto no”, remata.

APARTHEID EN EL MERCADO DEL ALQUILER

El Dr. Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, afirma que hace falta un sistema de inmigración más justo y eficiente entre los dos países.

“Las deportaciones, en sí mismas, no abordan las causas subyacentes que impulsan la migración hacia esta parte de la isla”, dijo.

El sociólogo explica que la migración ocurre en la mayoría de las regiones del mundo. “Aunque en el contexto específico de la migración haitiana, hay evidencia de que estos pueden llegar a tener problemas para el acceso a alquileres de viviendas”.

En otras palabras, ser migrante en el país no es motivo de exclusión de vivienda, pero sí ser negro. Es un país donde el colorismo está a flor de piel.

“La historia de un migrante que pierde el lugar donde vive solo por su origen étnico no solo implica la pérdida de un espacio físico, sino también la pérdida de su estabilidad emocional”, agrega.

De igual manera, William Charpantier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (Menamird), puntualizó que tener un lugar donde vivir es un derecho reconocido para todas las personas, incluyendo los migrantes, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.

Agrega que así se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, un documento en el que se establece que los Estados deben garantizar un ambiente seguro para el ejercicio de los derechos humanos.

Por eso, para Charpantier, el aislamiento en el mercado de alquiler, donde se niega el alquiler por sus orígenes, es inaceptable.

SER NEGRO Y HAITIANO BASTA PARA QUEDAR FUERA

El reloj marcó la una de la tarde, y mi estómago me recordó con un estruendo que aún no había comido. Aún así, el plato fuerte del día fue la pregunta de Kelvens Volcy:

“¿Por qué son así con nosotros aquí? Yo veo cómo tratan a los de otros países. Ellos son blancos”, susurró entre los dientes.

Rosmelia Mejía, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, explica que la crisis migratoria entre Haití y República Dominicana no es nueva. “Es un problema estructural. Es un tema complejo, con múltiples facetas”, dijo. “Todos los migrantes, independientemente de su estatus tienen derechos”.

La experta destacó que “ser negro y haitiano” a menudo implica una carga negativa. “La historia de la isla ha dejado un legado de racismo y colorismo que aún afecta las relaciones entre dominicanos y haitianos”.

Por eso, para William Charpantier de la Menamird, las autoridades deben poner toda su atención en el abordaje del tema migratorio con un enfoque especial hacia el respeto de los derechos humanos.

Y aunque ambos reconocieron el derecho que tiene la República Dominicana de aplicar sus leyes migratorias, incluida la deportación a quienes estén con estatus irregular, señalaron que se debe respetar el debido proceso.

Jean Carlos Lafontaine, abogado de profesión y administrador de propiedades con más de 15 años de experiencias en el mercado inmobiliario de alquileres, agrega que, en la

República Dominicana, el derecho a alquilar aplica a todos, incluyendo a los migrantes, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.

“La Ley General de Alquileres promulgada en 1955 y sus posteriores modificaciones, además del Código Civil dominicano, regulan las condiciones de arrendamiento, y no contempla que ninguna persona pueda perder el lugar donde vive por su nacionalidad”.

Por eso, dijo que las sanciones contra los propietarios que alquilen sus propiedades a extranjeros, especialmente aquellos indocumentados no está contemplado en ninguna ley.

“La verdad es ilegal y no entiendo porque este joven perdió el lugar donde vive”, remató.

Lo mismo reafirmó la experta en negocios inmobiliarios, Daniela Reyes, quién aseguró que no existe hasta el momento ningún mecanismo legal para regular a los dueños de una propiedad con fines de alquilarla a una persona indocumentada.

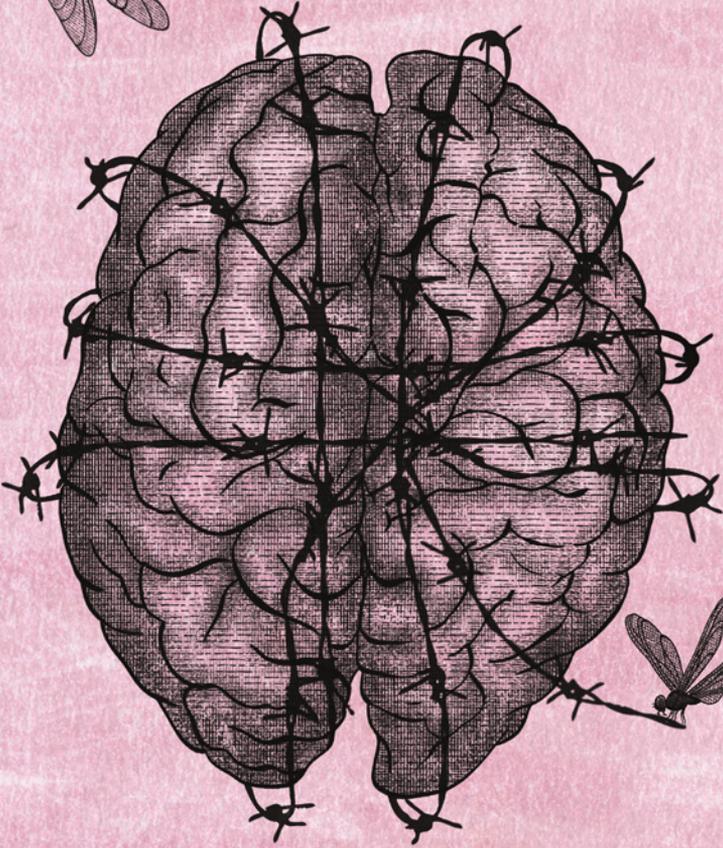
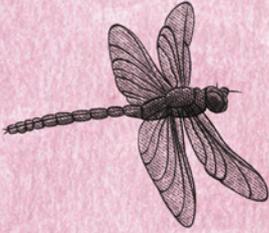
La experta explica que lo único que existe es la presentación de un anteproyecto de ley presentado en diciembre de 2024 por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que contempla limitar el alquiler a haitianos.

Desde esta realidad, definitivamente la República Dominicana se enfrentan a muros invisibles que limitan su acceso a derechos fundamentales, como el derecho alquilar, generando un verdadero apartheid, donde ser haitiano basta para quedar fuera del mercado de alquiler.

Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, en el país hay 222,916 viviendas en las cuáles vivían haitianos migrantes. El tipo predominante son las casas (56.6 %), siendo la forma de tenencia más frecuente el alquiler (64.9%), y sus condiciones estructurales bajas, representando el 73.5 %.

La encuesta, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), también revela que alrededor del 70 % de los inmigrantes no son propietarios de la vivienda que habitan, lo cual evidencia una fuerte dependencia del mercado de alquiler.

A las tres de la tarde llegó la hora de marcharse, y con ella la despedida. El sol está en su mayor esplendor. Kelvens Volcy abordó el mototaxi que lo llevaría hasta la parada del sur ubicada en el km. 12 de la carretera Sánchez. Junto con sus tres cajas de cartón empezó su trayecto de regreso al país más violento y pobre del continente americano. Quizás en su país experimente las limitaciones de vivir sin recursos ni oportunidades. Aquí, en República Dominicana, vivió la experiencia de que le fueran negados todos sus derechos.



UN CALVARIO MODERNO:

LA SALUD MENTAL EN
REPÚBLICA DOMINICANA



Por Adriana Suels
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Te llamas Elsa Quintana, tienes 55 años y vives en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hace más de veinte años recibiste el diagnóstico de un trastorno bipolar con episodios maníaco-depresivos. Desde entonces, ya no eres la misma: dependes de tu esposo y tus dos hijas, tu principal red de emergencia, no por elección, sino porque el sistema de salud mental de tu país te ha fallado. Hoy, tú y tu familia siguen recorriendo hospitales, pero en lugar de recibir atención se han visto obligados a transitar un camino marcado por la desorganización, la indiferencia y el abandono.

Julio Castellanos es el esposo de Elsa. Es un hombre amable y respetuoso, pero detrás de esa actitud hay más resistencia que optimismo. Desde que diagnosticaron a su esposa, su vida ha sido un bucle entre preguntar, insistir y volver a intentar. Ha hecho de todo para ayudar a Elsa y el desgaste es evidente. Cuando busca una palabra para describir la situación dice: “traumático”.

La historia de Elsa y Julio es el reflejo de un calvario moderno que viven muchas familias dominicanas. Lo que enfrentan a diario incluye hospitales que exigen que los familiares actúen como enfermeros, internamientos sin seguimiento, médicos que cambian en cada visita, citas imposibles de costear y un sistema desinteresado. En República Dominicana, vivir con un trastorno mental es navegar a la deriva: el estigma social pesa más que el acompañamiento, y la atención digna depende más de la suerte y del dinero que del compromiso del Estado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas reconocer sus capacidades, afrontar el estrés cotidiano,

trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Pero las barreras sociales, culturales, económicas y estructurales hacen que esta definición sea incomprensible para amplios sectores de la población mundial. En 2017, la resolución 52/12 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirmó que la salud mental es un derecho humano fundamental. No se trata solo de construir hospitales ni de repartir medicamentos, sino de que todas las personas, sin importar su edad, género, clase social, etnia o lugar de origen, tengan el derecho garantizado a recibir atención y apoyo para preservar su bienestar emocional, psicológico y social. No es un lujo ni un privilegio, sino una obligación del Estado y un componente esencial del derecho a la salud.

UNA CRISIS SILENCIOSA

República Dominicana es el país con la mayor carga de trastornos mentales en Centroamérica y el Caribe, según el informe Impacto de la Salud Mental en el Sistema de Salud Dominicano, realizado en 2023 por IQVIA, una firma internacional especializada en investigación y análisis del sector salud. El estudio revela que más de dos millones de dominicanos podrían estar viviendo con depresión, ansiedad o esquizofrenia. Expertos consultados para el informe estiman que esa cifra podría ser mayor, pero el miedo, la falta de información y el poco acceso a servicios hacen que muchas personas nunca lleguen a una consulta.

Estas cifras representan vidas. Cada año, entre seis y siete personas por cada 100 mil habitantes deciden acabar con su sufrimiento a través del suicidio, según el informe Suicidios en la República Dominicana 2019-2023, publicado por la Oficina

Nacional de Estadística. Los más afectados son los hombres y los jóvenes de 20 a 34 años, y las principales causas incluyen la depresión, la violencia doméstica, los conflictos familiares y la pobreza, agravadas por el miedo al juicio social, la falta de diagnóstico y la escasa atención en salud mental, especialmente en zonas rurales.

La psicóloga clínica Wendy Alba ha dedicado su carrera a defender el derecho a la salud mental en República Dominicana. En 2020, en plena pandemia, cofundó y dirige el Colectivo Salud Mental, que impulsa un sistema justo y accesible. Desde entonces, promueven políticas públicas con enfoque biopsicosocial, desarrollan programas comunitarios de prevención y cuidado, ofrecen terapia a defensores de derechos humanos y población general, y forman promotores de salud en autocuidado. También investigan de forma continua las necesidades en salud mental, especialmente en comunidades de base.

“Primero hablamos de derechos humanos y luego de salud mental”, dice. Para ella, la crisis política y económica arrastra a la población a un deterioro emocional, y el problema está en las desigualdades: vivienda, condiciones dignas, medioambiente y acceso a ex básicos también son salud mental. “Siempre decimos que la salud mental es la vida misma, y esa vida está en crisis. No todo está en la mente. Los problemas económicos no son imaginarios”, remata.

Aunque el Estado dominicano ha intentado modernizar el sistema, la salud mental sigue marcada por la falta de acceso.

Entre 2014 y 2017, el Ministerio de Salud Pública lanzó una reestructuración con unidades comunitarias, consultas

externas y hospitalizaciones breves. Pero el esfuerzo se quedó corto, ya que la atención sigue concentrada en la capital, Santo Domingo, y en la segunda ciudad del país, Santiago de los Caballeros.

En 2016, el Gobierno cerró el viejo manicomio fundado durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y lo transformó en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, con la promesa de una atención más humana y descentralizada. Se activó la línea telefónica del Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental y se crearon Unidades de Intervención en Crisis. Pero según IQVIA, sólo el 0.73% del presupuesto público en salud va destinado a este renglón, muy lejos del mínimo del 5% al 10% que recomienda la OMS.

La situación se agrava por otro problema: el estigma social. Muchos dominicanos aún temen buscar ayuda por miedo a ser juzgados, etiquetados o discriminados. “El problema es que al paciente le da miedo ser tildado de loco”, declaró uno de los psiquiatras entrevistados en el informe.

En República Dominicana, el tabú sobre la salud mental se aferra a creencias y costumbres que desvían a muchos del camino adecuado. Cuando alguien empieza a mostrar señales de deterioro emocional, la primera parada suele ser la iglesia, un pastor o un brujo, en lugar de un profesional de la salud. Estas costumbres mágicas y religiosas, muy arraigadas en sectores populares y conservadores, obstaculizan el acceso a la ayuda profesional.

A esto se suma una cultura que asocia la tristeza con la debilidad. Según el estudio de IQVIA, muchas personas ocultan su malestar por miedo al juicio social y a la presión constante de mostrarse siempre positivos. Wendy Alba

explica que, en el caso de los hombres, esa carga emocional suele traducirse en conductas de riesgo para reafirmar su hombría como beber hasta perder el control, buscar sexo como alivio físico o negar lo que sienten. Mostrar fragilidad no es una opción, por eso, una cerveza entre amigos termina siendo, para muchos, lo más parecido a una sesión de terapia. Es una realidad común: el libro *El colmadón: la psicoterapia del dominicano* (2024) relata cómo, en los años 80 y 90, los colmaditos, esas pequeñas tiendas de barrio que también funcionan como espacios sociales, se volvieron refugios emocionales improvisados, ante la ausencia de servicios formales.

SÁLVESE QUIÉN PUEDA EN EL SECTOR PÚBLICO

En 2002, apenas tres meses después del nacimiento de Vanessa, su segunda hija, Elsa, comenzó a cambiar. “En agosto de ese año tuvo una supuesta depresión posparto, pero desde entonces todos los meses recaía y eso se convirtió en trastorno bipolar”, relata Julio. Cuenta que la ha encontrado tirada en una esquina, llorando, diciendo incoherencias. Y no es sólo tristeza, también se pone agresiva, verbal y físicamente. “Eso ha pasado varias veces”, dice.

Debido a su trastorno bipolar, Elsa no puede llevar una vida funcional. Sus crisis no solo son recurrentes, sino cada vez más intensas y sin un tratamiento adecuado, como ha ocurrido en los últimos años, seguirá empeorando. Ya ha pasado mucho tiempo desde su diagnóstico y cualquier situación que le genere estrés puede desencadenar una crisis.

Algunos meses son más duros que otros, pero lo que no ha cambiado es el esfuerzo de su familia por acompañarla.

En una de esas crisis, Julio llevó a Elsa a la unidad psiquiátrica del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, y lo recuerda como un episodio traumático. Le dijeron que sólo podían atender a su esposa si él se quedaba con la paciente todo el tiempo, día y noche. Esa era la regla para los entre 10 y 15 internos en la sala.

“Se supone que cuando una persona es internada es porque necesita estar bajo control, con medicación, con seguridad, con terapia. Y, sobre todo, necesita aislarse de lo que sea que le esté causando la crisis, sea la sociedad o su propia familia. Pero en el Darío Contreras te obligan a quedarte. No es opcional. Aunque el paciente esté agresivo, aunque esté incoherente. Tú te quedas. Y tú mismo das la medicación. Literalmente te conviertes en enfermero. Lo único que te dan es el espacio. Yo amanecí ahí tres días seguidos. Tres días sin dormir, sin trabajar. ¿Y mi empleo? ¿Y las responsabilidades? ¿Cómo se supone que uno hace todo eso?”

En vez de recibir apoyo profesional, los dejan solos. Y muchas veces, quienes cuidan también terminan mentalmente afectados debido a la carga emocional, física y económica que deben afrontar.

Buscando una mejor atención, acudieron a otro centro médico de la capital, el Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, donde no exigen que el familiar se quede las 24 horas pero la atención sigue siendo frágil: “Le dan su medicación y tiene algunas terapias grupales, y otras veces la ve un psicólogo. Pero uno tiene que estar yendo constantemente. No es que sea un problema visitar o acompañar al paciente,

claro que no, es nuestra familia, pero cuando se trata de salud mental, incluso nuestra presencia puede alterarla. Entonces esa interacción se vuelve un poco incoherente,” dice Julio.

La familia no tuvo seguimiento psicológico individual ni contención emocional real, además, el alta médica no se da cuando el paciente está estable, sino cuando el familiar “puede manejarlo”. Así, el criterio no es clínico, sino doméstico: si alguien puede cargar con la crisis en casa, el hospital la despacha.

El seguimiento ambulatorio también es precario porque Elsa no tiene un psiquiatra fijo; cada vez que necesita atención, la atiende el médico de guardia del hospital.

“Nos hacen contar la historia desde cero cada vez”, cuenta Julio. No hay expediente, no hay continuidad, es como si todo empezara de nuevo. Esta falta no solo retrasa el tratamiento sino que desmoraliza a la familia y desorienta al paciente. Para Julio es un sistema de “sálvese quien pueda”.

EL PRIVILEGIO EN EL SISTEMA PRIVADO

Ante el panorama, Vanessa Castellanos, la hija menor de Elsa, buscó opciones en clínicas privadas. Lo que encontró fue un negocio: los precios parecían más propios de un resort de lujo que de un centro de atención psiquiátrica. ANSALUD RD, una unidad de rehabilitación mental, cobra unos 200 mil pesos por apenas quince días de internamiento, eso es alrededor de 3 mil dólares al cambio actual.

“Yo quedé fría”, dice Vanessa con una mezcla de indignación y resignación. “¿Quién dispone de 200 mil pesos cada 15 días? Es una locura”, afirma.

Desde el Colectivo Salud Mental, Wendy Alba advierte que para la mayoría de las personas, costear la atención en salud mental es casi imposible. Para ponerlo en perspectiva, el salario mínimo en la isla va desde los 15,860 hasta 29,988 pesos dominicanos, es decir, entre 288 y 545 dólares. “Un psiquiatra puede cobrar entre seis y siete mil pesos (unos 113 dólares) por consulta, sin contar los medicamentos. Un psicólogo cobra desde mil quinientos hasta cinco mil (81 dólares) por consulta”, explica.

Además, no todos los seguros médicos cubren el servicio de salud mental. “Tienes que tener un plan premium, y aun así es complicado. Debes pedirle al centro una factura y solicitar el reembolso, pero no todo el mundo puede hacerlo, ni sabe cómo”, denuncia Wendy.

Ana María López, una mujer dominicana de 30 años, sí tiene seguro, y aún así ha tenido que batallar para lograr acceder a las consultas. Es una joven de clase media que, pese a estudiar, trabajar, buscar estabilidad, se ve arrinconada por el peso de la presión económica y emocional. Su historial de depresión y ansiedad está directamente ligado al agobio financiero y la sobrecarga cotidiana. “Si no tuviera seguro, estaría jodida”, dice. Recuerda cómo llegó incluso a ayunar para poder ahorrar los seis mil pesos que cuesta una cita psicológica. Ana no solo expone una crisis personal, sino una fractura sistémica: la salud mental sigue siendo un privilegio, incluso para quienes parecen tenerlo todo resuelto.

No es sólo un problema de dinero. El informe de IQVIA y el Informe de Evaluación del Sistema de Salud Mental en República Dominicana de la Organización Mundial de la Salud del 2018 confirman que, con frecuencia, los pacientes reciben

tratamientos sin diagnósticos adecuados ni seguimiento clínico, convirtiendo la atención en una verdadera ruleta rusa.

Es el caso de Samuel Caraballo. A los 19 años, entró al sistema de salud mental dominicano casi por accidente. Acompañaba a su novia a una consulta psiquiátrica cuando ella, preocupada por su agotamiento emocional, le pidió que hablara con la doctora. No tenía cómo pagar, pero la psiquiatra propuso atenderlo gratis. No hubo evaluación psicológica ni acompañamiento terapéutico, solo una receta. “Me dieron muestras gratis de medicamento y ya. Nunca me preguntaron por mi entorno”, recuerda. Con la pandemia, la doctora dejó de atenderlo y Samuel se quedó solo, automedicándose. Lo que siguió fue un deterioro silencioso con lagunas mentales, pensamientos suicidas y una sensación de haber sido usado como conejillo de indias.

Su historia pone en evidencia lo difícil que puede ser para muchos jóvenes acceder a un apoyo real en un sistema cargado de estigmas, con pocos recursos y mal conectado. Un modelo de atención que muchas veces no alcanza a responder a la urgencia y complejidad de quienes buscan ayuda.

LA SOLUCIÓN ES COMUNITARIA

La salud mental se sostiene sobre cuatro pilares: promoción, prevención, atención y rehabilitación. Para el Colectivo Salud Mental, las dos primeras son las claves para cambiar la crisis actual en República Dominicana. Lo que falta son trabajadores comunitarios que escuchen, acompañen y den seguimiento.

Pero la experta Wendy Alba señala que actualmente en el país no hay visitas domiciliarias, ni redes comunitarias de apoyo, ni seguimiento real de fácil acceso para las personas, ya que el sistema está centrado en la medicación mientras se ignora lo más importante, el entorno.

En otros países, el enfoque comunitario es progreso demostrado. En Uganda, la OMS documentó cómo personas sin formación médica, pero entrenadas para brindar apoyo, lograron reducir síntomas depresivos y mejorar la adherencia al tratamiento. Chile y Colombia han sido ejemplo con reformas estructurales, campañas nacionales y la formación de profesionales desde el primer nivel de atención y son modelos sostenibles, reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud.

El futuro de la salud mental no está solo en los hospitales. Está en las casas, los barrios, las escuelas, en las relaciones que sostienen nuestro día a día. La atención debe ser constante, cercana y preventiva, no solo una reactiva. Se trata de llegar antes de la crisis, de acompañar y de reconocer a quienes cuidan y a quienes necesitan ser cuidados

Pero por ahora, te llamas Elsa y no sabes a dónde más acudir. Te llamas Julio y estás cansado. Te llamas Vanessa y no puedes pagar atención privada. Te llamas Ana María y un día dejaste de comer para ir a terapia. Te llamas Samuel y ya no confías en los profesionales. Te llamas de todas las formas. Pero hoy, en República Dominicana, no tienes garantías para tener una atención de salud mental digna.



CUANDO LA VEJEZ DUELE:

**ABANDONO, ABUSO Y OLVIDO EN
ADULTOS MAYORES DOMINICANOS**



Por Helen Bruján

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

La República Dominicana enfrenta una realidad silente: el maltrato hacia las personas adultas mayores. Una herida que no siempre sangra, pero que consume lentamente la dignidad de quienes enfrentan la vejez en soledad.

Doña María de la Cruz, con sus 93 años a cuestas, es uno de esos rostros que el país se niega a mirar. Su cuerpo encorvado y sus manos temblorosas guardan historias de lucha, de maternidad y de servicio. Vive sola en una casita descascarada del sector La Perla Antillana, en Santo Domingo Este, donde el silencio le hace compañía y el techo apenas resiste el agua que se cuele con cada aguacero.

A veces come, a veces no. Depende de si alguien recuerda que aún respira. Su pensión raquítica no le alcanza para los medicamentos que su cuerpo exige. Pero el dolor más profundo no se alivia con pastillas.

“No es el hambre lo que más me duele... es el olvido de mis hijos”, dice con voz apagada, mientras aprieta el rosario entre los dedos como si de él pudiera colgarse la esperanza.

El hijo que vivía con ella fue sacado de la casa por las autoridades tras múltiples denuncias. Los vecinos, testigos de una violencia que se colaba por las paredes, contaban que los gritos eran como cuchillos en la madrugada. “Le vociferaba cosas horribles, la empujaba como si fuera un mueble viejo... y un día, simplemente la dejó encerrada sin agua ni comida”, recuerda uno de ellos.

Desde entonces, la comunidad se ha convertido en su sostén improvisado.

Doña María no es un caso aislado. Es apenas una flor marchita en un jardín que la sociedad ha dejado de regar.

Como ella, cientos de envejecientes en el país son víctimas de abusos físicos, negligencia emocional y abandono familiar, convertidos en fantasmas dentro de sus propios hogares.

Mientras tanto, el país avanza sin mirar atrás. Pero cuando se rompe el vínculo con los mayores, no solo se quiebra una vida: se fractura la memoria de una sociedad.

Según datos del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), en los últimos cinco años se han recibido 2,675 denuncias de maltrato a adultos mayores en todo el país. Su director ejecutivo, José García Ramírez, señala que “el abandono, los conflictos familiares y la violencia patrimonial están entre las principales quejas recibidas por la institución”.

Indicó además que muchas de las denuncias provienen de sectores vulnerables donde los adultos mayores dependen emocional y económicamente de familiares que, muchas veces, terminan convirtiéndose en sus agresores.

A pesar de las cifras, el CONAPE reconoce que estas representan solo una fracción del problema real.

“Existe un subregistro alarmante, porque muchos envejecientes no denuncian por miedo, vergüenza o desconocimiento de sus derechos”, afirma García Ramírez.

El problema no se limita a la República Dominicana. Las estadísticas globales reflejan la gravedad de esta situación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso en entornos comunitarios durante el 2024.

Además, en centros de atención institucional, se estima que dos de cada tres trabajadores han presenciado o cometido actos de maltrato hacia los ancianos. Por su parte, la Organización de

las Naciones Unidas (ONU) advierte que el envejecimiento de la población mundial incrementará la prevalencia del maltrato si no se adoptan medidas urgentes y eficaces.

La doctora Cristian Brujan, médico geriatra, explica que el abuso a las personas adultas mayores no siempre es evidente. Puede ir desde el maltrato físico hasta formas más sutiles de violencia, como excluirlos de las decisiones sobre su salud o no proporcionarles los cuidados básicos.

“Es muy común que la familia oculte los diagnósticos y decida si el paciente se trata o no. Eso también es violencia”, expresa.

Además de los daños físicos, los impactos emocionales son profundos: miedo, agitación, ansiedad y depresión son frecuentes. La psiquiatra Carmen Ramírez señala que “la depresión en adultos mayores se manifiesta de forma diferente que en los jóvenes. Es más frecuente ver apatía, aislamiento, pérdida de apetito y conversaciones recurrentes sobre la muerte”.

Ramírez insiste en que estos signos muchas veces simulan otras enfermedades. “Cuando un adulto mayor presenta muchas crisis de salud, es crucial revisar su estado emocional. Podría ser el detonante de otros problemas físicos”.

Esto fue evidente durante una brigada de salud que realizó la organización Honrado las canas. Los apellidos de los adultos mayores no se revelan para garantizar su seguridad.

“Mi hijo me aísla en una habitación, dice que es para que no moleste, pero yo solo quiero hablar, paso días sin ver a nadie, y a veces ni sé qué día es”, dice Miguel, 83 años, residente en Los Mina.

“A veces me dejan sin mi medicina porque es muy cara. Me duele más el alma que el cuerpo cuando me la quitan. Ya ni siquiera me preguntan si tengo hambre o frío, asegura doña Rosa, 89 años, del barrio Gualey.

Pero, los maltratos no solo lo reciben los adultos mayores de escasos recursos. Pedro tiene 91 años y es residente en Gazcue en una de las torres de apartamentos más exclusivos del país. Fue un funcionario influyente en varios gobiernos y a pesar de su posición social no está exento del abandono. En una consulta domiciliaria confesó que es maltratado por su enfermera: “Ella me habla mal sí me quejo del dolor. Me dice que ya estoy viejo, que eso es normal. Yo no quiero molestar, pero no es justo que por tener esta edad me traten como si no valiera nada”, cuenta.

Para la doctora Brujan, este problema es urgente y requiere una respuesta global, multisectorial, centrada en los derechos humanos. “El maltrato de las personas mayores es un problema que debe prevenirse lo antes posible”, afirma.

Y es que este no es solo un asunto médico o familiar. Es un problema de justicia, de derechos, de dignidad. Cada adulto mayor que sufre violencia, abandono o negligencia representa una deuda social pendiente. Por eso, urge que el Estado dominicano impulse políticas públicas más firmes, campañas de educación y un marco legal que castigue con mayor severidad a quienes atentan contra los derechos de las personas mayores.

Quienes acompañan día a día a los adultos mayores saben que el mayor peso no siempre es físico, no está en cambiar pañales ni en cargar cuerpos debilitados por los años, sino en sostener corazones rotos por el abandono.

“Uno puede lidiar con una úlcera o con la demencia, pero ¿cómo le curas a una doña el dolor de que sus hijos no la llamen nunca?”, cuenta Andrea, cuidadora con más de 12 años de experiencia en una casa hogar de Santo Domingo Este y que pidió la reserva de su apellido. “A veces se nos quedan mirando con los ojos llenos de espera. Espera que nunca llega”.

Los cuidadores se convierten muchas veces en los únicos testigos del maltrato más cruel: el de la indiferencia familiar. Algunos envejecientes llegan con moretones, otros con desnutrición o síntomas de negligencia severa. Pero lo más común, coinciden varios entrevistados, es la huella invisible del abandono emocional.

Luis, enfermero auxiliar en una residencia privada y que también pidió la reserva de su apellido, comparte: “Una señora me dijo una vez: ‘Mijo, yo me estoy muriendo por partes. Primero fue la memoria, después las piernas... ahora es el alma’. Y todo porque sus hijos no pasaron ni en Navidad”.

Para muchos cuidadores, la vejez debería ser un retorno al amor, pero en la práctica, dicen, parece más una condena al olvido. Como si, al perder productividad, las personas mayores se volvieran prescindibles.

“No entiendo cómo hay hijos que cuidan un carro mejor que a su mamá”, dice Rosa, con rabia contenida. “Uno los baña, los peina, les da de comer. Pero lo que de verdad quieren es una visita, una caricia, una palabra con nombre propio. Es como si la dignidad también tuviera fecha de vencimiento en este país”.



El silencio de los envejecientes no puede seguir siendo ignorado. Es hora de hablar por ellos, de crear canales accesibles para sus denuncias y de asegurarles una vejez digna. Porque mientras no haya justicia, el silencio seguirá doliendo más que las heridas.



DONDE EL TAMBOR RESISTE:

**LA MÚSICA AFRO DOMINICANA
RECLAMA SU DERECHO A EXISTIR**



Por Dulce Grillo

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

En una vieja nave de artesanía en la ciudad de Yamasa, donde el polvo y la brisa se mezclan con el eco de un tambor, Santa Martínez repite un ritual aprendido sin necesidad de escuela. Ella no estudia partituras, no sigue pautas escritas, pero lo que hace es música en su estado más puro. Lo aprendió de su padre, y ahora lo enseña a niños y niñas que quieren seguir tocando palo, a pesar del olvido institucional.

—Esto se lleva en la sangre —dice. En su voz hay orgullo, pero también cansancio.

Santa acomoda el palo mayor para enseñármelo. Es un tambor largo, hecho de tronco ahuecado, cubierto de cuero de vaca, tensado con aros y clavijas. A su lado descansan los alcahuetes, más delgados, listos para acompañar con repiques agudos. Una güira metálica, dos maracas y el catá completan el conjunto de instrumentos. Cuando los niños la rodean, Santa les muestra cómo se siente el ritmo antes de tocarlo:

—Esto no se aprende con la cabeza, sino con la barriga—, dice, mientras sonríe y hace sonar el cuero.

Santa, junto a sus hermanos, forma parte de un grupo musical que toca en fiestas patronales, encuentros culturales y ferias populares. Han estado en escenarios como Bellas Artes, en la Plaza de la Cultura y en actividades organizadas por ayuntamientos. Pero no por eso, dice, su trabajo es reconocido. El reconocimiento no es presencia, es apoyo.

—Tocamos por tocar. Casi nadie nos toma en cuenta. Ni siquiera los que ya están viejitos han podido conseguir una pensión del gobierno. No existimos para ellos.

Santa no está sola. Corina Jorge, cantautora de la música salve, vivió la discriminación de forma directa conmemorando el día de la mujer el pasado 8 de marzo. Estaba cantando frente al monumento Puerta del Conde, donde se izó la bandera dominicana por primera vez, cuando la Policía Nacional le quitó las bocinas. Pensaban que estaba cantando en creole y que Corina era haitiana. La interrumpieron por ignorancia y por negra, por cantar una música que no conocían.

—Si hubiera sido una española cantando, no decían nada — dice Corina— A mí me detienen porque creen que como soy negra, soy haitiana. Pero esto es mío. Esta es mi cultura. Yo compongo mi salve, la creo desde el corazón. Eso no me lo pueden quitar.

Corina recuerda que desde los siete años ya tenía un instrumento típico de la salve, el panderito. Lo hizo su madre. Desde entonces canta con su familia, con su esposo, con sus hijas, con sus sobrinos. Ha representado la cultura dominicana en todo el país. Pero ni el Ministerio de Cultura ni ninguna otra institución le ha reconocido su trayectoria con algo más que una palmada en la espalda.

—Nosotros tocamos con nuestros propios equipos. Nuestro balsier, nuestra tambora, nuestra güira. Nadie nos ayuda. Nadie pregunta qué necesitamos. Solo nos usan cuando conviene— comenta Corina.

Ella se inclina por los instrumentos de cuerda. En su casa tiene un balsié que cuida como un hijo. Es el mismo que usaba su madre, el que la acompañó en concursos de la iglesia, en marchas de mujeres y en vigiliass frente al Palacio Nacional. También tiene una tambora y una güira que retumban como eco de las voces de su comunidad.

–Yo canto con todo eso–, dice, –pero mi instrumento favorito es mi voz–.

Y allá, en un callejón de Villa Mella, donde los techos de zinc reverberan con cada golpe de tambor, la historia de Enriquez Minier, actual capitán de la Cofradía de los Congos, sigue marcando el ritmo de la resistencia. Desde que su padre, el legendario Sixto Minier, falleció, Enriquez asumió el liderazgo del grupo. Con trece años dentro de la cofradía, ha aprendido a fabricar todos los instrumentos él mismo: congos mayores y menores, maracas, canoítas, y hasta los tambores de dos parches que distinguen a esta agrupación. Los seca al sol, prepara el cuero de chivo, los afina con paciencia.

–Cuando no tenemos actividades, nos ponemos a ensayar. Esto no es un lujo, es lo que sabemos hacer para sobrevivir–, dice Enriquez.

A veces sólo reciben 200 pesos (unos 3.25 dólares) por cabeza luego de un velorio o una novena. No hay salario, no hay contrato, no hay apoyo del Estado. Solo hay fe. Una fe que se renueva en cada tambor que él mismo construye.

–Hasta el sol de hoy no hemos recibido ayuda del gobierno. Yo tengo una pensión, pero eso fue por mi trabajo anterior. La cofradía sobrevive de los toques, de las fiestas, de las velas–, agrega con resignación.

En Villa Mella, hay una estatua en honor a su padre: Sixto, con el Congo en las manos, símbolo del pueblo. La agrupación fue registrada por la UNESCO en 2001 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero la declaración no trajo ni sustento ni seguridad. Solo orgullo. Un orgullo que duele.

Y como si eso no fuera suficiente, en el 2002 la música fue interrumpida por la policía. Querían prohibir el tambor, alegando "ruido" y "desorden". Enriquez los enfrentó con serenidad:

—¿Cómo va a ser ruido lo que viene de nuestros muertos? Esto es sagrado—, recuerda que les dijo. Tocaron igual. Por los vivos y por los que ya no están.

Cada Pentecostés, Enriquez convoca a los 14 miembros de la cofradía, en su mayoría jóvenes, y ensayan un día antes del evento. No hay partitura. Solo memoria. Solo historia. Solo tambor. Porque aunque el Estado los olvide, mientras haya cuero que golpear y cuerpo que danzar, los Congos seguirán vivos. Con cada repique, con cada maraca, con cada canoíta, se escucha una voz antigua que susurra: "Sigán tocando, que yo no me fui."

DE TAMBOR A PATRIMONIO, DEL PATRIMONIO AL OLVIDO

Roldán Mármol, experto en cultura afrodescendiente y director de la Fundación Cultural Cofradía, ha investigado por décadas la historia y las prácticas musicales de origen africano en República Dominicana. Su diagnóstico es claro:

—No hay una provincia que haya grabado profesionalmente su folclor musical. Y eso no es casualidad. Es porque todas estas músicas están ligadas a la afrodescendencia, y eso se ha negado históricamente—.

Los palos, el gagá, la salve, el congo, la zarandunga, el bambular: todos ritmos nacidos de la resistencia, del sincretismo, de las comunidades negras que, desde la colonia, sobrevivieron a la esclavitud y a la exclusión. Muchos de estos ritmos tienen

siglos de existencia. Otros, como el gagá, se consolidaron en el siglo XX en los bateyes del este. Y todos han sido, en mayor o menor medida, relegados por una política cultural que los considera "folclor" pero no arte.

—La tambora del merengue viene del tambor de los palos — dice Roldán—. La identidad dominicana tiene su base en lo afro. Pero eso no está en los libros, ni en las escuelas, ni en los medios. Se ha negado para imponer una idea blanca de lo dominicano.

Roldán ha trabajado para que la Cofradía del Espíritu Santo de Cotuí sea reconocida por la UNESCO. También ha acompañado a la Asociación Dominicana de Gagá y a festivales como el de Atabales de Sainaguá, el de Yamasa, el de los Hermanos Guillén, el Good Morning Guavaberry y muchos otros. Su lucha no es sólo por la cultura, es por el derecho a existir. Él cree en la articulación entre universidades, alcaldías, medios de comunicación comunitarios y grupos locales para sostener estas tradiciones. Y cree también en la resistencia del pueblo.

—Ninguna danza española ha sobrevivido como cultura viva. La zarzuela, la contradanza, la mazurca: todo eso se perdió. Pero los palos siguen vivos. El gagá sigue vivo. Eso es resistencia—.

A pesar de los reconocimientos simbólicos, muchas de estas expresiones no cuentan con apoyo material, no existen líneas presupuestarias estables para la promoción o preservación de estos géneros. Los músicos y bailarines no son incluidos en los planes culturales oficiales ni en los catálogos institucionales, comenta. Muchos sobreviven con colaboraciones informales o por lo que pueden reunir en una fiesta.

La producción discográfica y audiovisual independiente ha intentado suplir este vacío, pero con recursos limitados. Existen

grabaciones que han sido financiadas por ONG o universidades extranjeras, no por las entidades gubernamentales que deberían garantizar ese derecho. La falta de un archivo sonoro nacional que documente y preserve estas músicas es una deuda pendiente.

Roldán advierte que el sistema educativo ignora por completo estas expresiones. No se enseña gagá, ni salve, ni palos en las escuelas públicas. La música afrodominicana no forma parte del currículo. Las niñas y niños no tienen acceso a estos saberes a menos que vivan en comunidades donde aún se practican, lo que perpetúa la exclusión cultural y simbólica.

En términos legales, el reconocimiento patrimonial se queda en el papel. Aunque la UNESCO haya inscrito a los Congos de Villa Mella como Patrimonio de la Humanidad, no hay una ley específica que asegure el financiamiento ni la continuidad de sus prácticas. Las instituciones celebran con actos protocolares, pero luego dan la espalda a los portadores de esa cultura, insiste Roldán.

Y mientras tanto, las grandes cadenas de medios continúan promoviendo modelos culturales homogéneos, centrados en lo urbano, lo comercial, lo globalizado. La tambora de palo, la güira artesanal, el fututo soplado en gagá, no tienen espacio en televisión ni en las emisoras. Se les considera "atraso", cuando en realidad son raíz, continúa.

ALVIN Y LA LIBERTAD DE BAILAR

Alvin Peña es bailaror de gagá. Empezó a bailar a los 13, cuando se desafió a sí mismo frente a su hermano mayor. Desde entonces no ha parado. Para él, el gagá no es un show,

es una expresión espiritual. Pero también ha sentido en carne propia la represión y la desconfianza.

—La policía nos cuida, sí, pero también se nota que les da vergüenza. Recuerdo cómo un coronel, al ver que lo estaban grabando, quiso que le quitaran el teléfono. No quería que se viera que él también estaba disfrutando del gagá. Como si eso fuera algo malo. Pero esto no es una amenaza, esto es parte de nosotros—.

Alvin baila con machetes, con una pasión que no se explica. No sabe decir cómo aprendió. Solo sabe que lo tiene dentro. Su escuadrón de baile se desplaza por las ciudades de Villa Altigracia, La Romana, San Pedro, por todo el país. Donde los llamen.

—Dios me dio ese don. A través del gagá he conocido gente, he llegado a lugares donde nunca soñé estar. Y eso no me lo quita nadie—.

El gagá ha sido para Alvin una escuela sin aulas. Aprendió de la observación, de la improvisación, de la necesidad. Con el tiempo, desarrolló un estilo único, respetado por quienes lo ven bailar.

—A mí no me enseñaron, yo lo sentí—, dice. —Hay cosas que nacen del pecho y no del libro—.

Su equipo, al que llama “escuadrón”, no es solo un grupo de baile: es su familia. Se acompañan, se cuidan, se enseñan entre sí. Cuando uno cae, los otros lo levantan. En ese grupo ha encontrado amistades profundas, lealtades inquebrantables, y una forma de ser él mismo sin miedo.

Pero no todo es fiesta. Alvin cuenta que muchas veces han tenido que suspender actividades por falta de apoyo o por amenazas veladas.

–Nos ven con pañuelos y tambores y ya creen que somos peligrosos. Pero no saben lo que esto significa para uno. Esta es nuestra manera de rezar, de recordar, de agradecer–.

Pese a todo, Alvin no deja de bailar. Y cada Semana Santa, cuando se visten con los colores del gagá y salen a las calles, dice que siente algo que no puede explicar.

–Es como si los espíritus vinieran con uno. Como si los que se fueron bailaran detrás. Y mientras ellos estén, yo también estaré–.

Por su parte, vive el gagá como una especie de ceremonia portátil. En su mochila lleva pitos, fututos, pedazos de tubo que sopla con fuerza, y una colección de pañuelos de colores.

–Cada color representa un santo–, explica. El rojo es de Anaís, el verde de San Miguel, el azul San Santiago. Su machete, que no es de pelea sino de danza, brilla bajo el sol de cada pueblo al que va. Sus movimientos son precisos, y cuando baila en medio del gagá, el ritmo lo posee.

DERECHOS CULTURALES:

LETRA MUERTA

La Constitución Dominicana consagra los derechos culturales en su artículo 64. La Ley Orgánica del Ministerio de Cultura establece el deber de proteger, difundir y apoyar las expresiones del patrimonio cultural inmaterial. República Dominicana ha firmado convenios internacionales sobre diversidad cultural y patrimonio.

Y sin embargo, los Congos del Espíritu Santo, declarados patrimonio de la humanidad en 2001, están en peor estado que hace dos décadas. Lo mismo pasa con el grupo de baile los Guloyas, reconocidos en 2005. No tienen locales, no tienen fondos, no tienen programas estatales de apoyo.

—La exclusión también es una forma de censura —afirma Roldán— Cuando no te invitan, cuando no te graban, cuando no te incluyen en los festivales, te están silenciando—.

La censura, entonces, no es siempre directa. A veces es una ausencia planificada.

Corina dice que la clave está en integrar a la juventud.

—Ya no bailan como antes. Ya ni se enamoran. Solo menean la cabeza frente a una bocina. La cultura se está muriendo porque no se enseña. Si estuviera en las escuelas, otra cosa sería—.

El problema no es solo la falta de voluntad institucional, sino el desconocimiento colectivo. Muchos dominicanos no saben qué es el gagá, nunca han escuchado una salve en vivo ni han asistido a una fiesta de palos. La invisibilidad de estas manifestaciones ha sido naturalizada, como si no existieran, como si fueran parte del pasado y no del presente.

Los derechos culturales implican acceso, participación y sostenibilidad. Pero los portadores de estas expresiones viven con incertidumbre. No tienen espacios donde ensayar ni políticas que garanticen su continuidad. Todo depende de la buena voluntad de un alcalde, de una iglesia local, o del ánimo de la comunidad. No hay garantía estructural.

Además, los artistas afrodescendientes enfrentan doble discriminación: por su origen y por el tipo de arte que hacen.

Se les niega el acceso a circuitos de arte contemporáneo, a fondos de desarrollo creativo, a festivales oficiales. Su arte no entra en la categoría de "cultura exportable" ni es rentable para las agendas de promoción turística, afirma Roldán.

En las escuelas de arte del país, no hay materias dedicadas a la música de palo, ni a la construcción de instrumentos tradicionales, ni al estudio de los cantos rituales. La formación sigue siendo eurocéntrica, centrada en el teatro clásico, el ballet, el jazz y el canto lírico. Todo lo que huele a tambor es relegado a una clase de folclore opcional, insiste Roldán.

La ausencia de documentación también contribuye al borrado. Muchas de estas músicas no están registradas oficialmente, no tienen partituras, grabaciones profesionales ni catálogos en las bibliotecas públicas. Lo que sobrevive es gracias a la transmisión oral y a la terquedad de quienes se niegan a dejar morir su tradición.

En muchos casos, las agrupaciones sobreviven con lo mínimo: un solo tambor parchado, un micrófono prestado, una bocina improvisada. A veces tocan sin cobrar, solo por mantener viva la práctica. Esto genera fatiga, frustración, y una sensación de abandono que corroe la esperanza.

La internacionalización de estas músicas ha sido contradictoria. Mientras artistas europeos las graban, las estudian y las promueven en festivales internacionales, sus protagonistas locales no reciben crédito, pago ni acceso a esos espacios. Se produce una apropiación simbólica sin redistribución de beneficios.

Al final, lo que está en juego no es solo el reconocimiento simbólico, sino la posibilidad de que estas comunidades vivan de lo que son, de lo que saben hacer, de lo que

llevan generaciones transmitiendo. Defender los derechos culturales no es conservar un museo, es garantizar la vida de quienes sostienen esa cultura con sus cuerpos, sus voces y sus tambores.

SENTIDOS COMUNES A DESMONTAR

Esta historia revela que lo afrodescendiente no es periférico: es central. Sin tambor no hay merengue. Sin palos no hay tambora. Sin gagá, no hay carnaval. Sin salve, no hay espiritualidad popular. Pero el discurso dominante ha impuesto sentidos comunes que justifican la exclusión:

- "Eso no es música, es bulla." → Es música ancestral, compleja y viva.
- "Eso es haitiano." → Es afrodominicano. El gagá, los palos y los congos forman parte de la diversidad cultural nacional. Es cultura compartida.
- "La cultura está en el ballet y el teatro." → La cultura también está en el barrio, en el monte, en la tambora, en la güira, en la voz de Corina.
- "Lo negro se tolera, pero no se celebra." → Debe celebrarse. Reconocerlo es justicia, no concesión.
- "Es folclor, no arte." → Es arte. Es identidad. Es memoria viva.
- "Eso es del pasado, ahora estamos en lo moderno." → No hay presente sin pasado. Las raíces también son futuro.
- "La música de tambor es cosa de viejos." → Es cosa de sabios. Y sigue viva en la juventud que la hereda.

- "Eso es para los campos, aquí en la capital no pega." → Lo afro no tiene geografía. Vibra donde haya piel, historia y tambor.
- "Eso es para Semana Santa, después no sirve." → Es parte del calendario espiritual del pueblo, no un adorno pasajero.
- "Son expresiones primitivas." → Son sofisticadas en ritmo, lenguaje, simbolismo y función social.
- "El Ministerio sí los apoya, lo que pasa es que no se organizan." → No se trata de organización, sino de voluntad política y equidad.
- "Eso es para entretener turistas." → Es para honrar a los ancestros, no para el espectáculo.
- "Si fueran tan importantes, estarían en las universidades." → La exclusión académica no es prueba de ausencia, sino de racismo estructural.
- "Lo tradicional no innova." → La tradición es innovación sostenida por siglos de creatividad colectiva.

Cada vez que una banda de gagá desfila por los caminos polvorientos de San Pedro, cada vez que Santa enseña a un niño a tocar la tambora, cada vez que Corina canta frente al palacio con su güira, hay un país que se niega a morir. Un país profundo, olvidado, oculto por siglos, pero terco en su resistencia.

UN TAMBOR

LATIENDO EN LA OSCURIDAD

Corina lo resume mejor que nadie:

—Un país sin cultura no es país—.

Y ese país, que se jacta de tener una cultura rica, diversa y alegre, no puede seguir dejando en la sombra a quienes le dan ritmo a su identidad.

Hoy, en cada pueblo el tambor sigue sonando. A veces lo detienen. A veces lo silencian, pero no ha dejado de latir porque mientras haya alguien que cante, que toque, que baile, la cultura afrodescendiente estará viva y con ella, el corazón más profundo de lo dominicano.

Un tambor que suena en la oscuridad es también un faro. No ilumina con luz, sino con memoria. Golpea como quien llama, como quien busca, como quien exige presencia, cada toque es un acto de resistencia. No hay silencio que lo anule. Ni desinterés que lo desactive. Es el ritmo de los pueblos que no se rinden.

Los cofrades que afinan sus tambores al borde de la desesperanza también están sembrando esperanza. Con cada cuero estirado, con cada ensayo a la luz de un bombillo precario, están diciendo: aquí estamos.

Santa, Corina, Alvin, Enríquez... todos son piezas de un mosaico vibrante que aún late pese al olvido. No necesitan monumentos. Necesitan justicia cultural, que se escuche ese tambor en las aulas, en los teatros, en las plazas, en las radios, que no se quede encerrado en el ritual, que atraviese lo público y lo político.

El Estado tiene una deuda. Una que no se paga con premios ni declaraciones simbólicas. Se paga con políticas vivas, con presupuesto, con voluntad.

Mientras tanto, la comunidad se organiza. Con lo poco que tiene, con lo que sabe, con lo que siente. Porque saben que, si no tocan ellos, no tocará nadie.

El tambor es también el latido de la tierra. Cuando vibra, recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Cuando calla, el país pierde un trozo de sí mismo y si se apaga, ¿qué queda? Un país sin cultura no es país. Un país sin tambor no tiene cómo narrarse desde adentro.

Que este epílogo no sea un cierre, sino un llamado. A oír más allá de lo evidente. A mirar con respeto lo que el prejuicio ha intentado enterrar.

El tambor no necesita traducción. Su lenguaje es universal. Habla del dolor, del gozo, de la rabia y del amor. Es cuerpo y es alma.

Por eso, cada golpe debe importarnos. Porque allí, en cada repique, está escrita la historia que no salió en los libros.

Y quizás la noche sea larga, pero mientras haya un tambor latiendo, habrá una posibilidad.

Una posibilidad de país.

Una posibilidad de verdad.

Una posibilidad de justicia.



✚ Derechos

Sobre el proyecto

Esta publicación es el resultado del Proyecto “Más Derechos: fortalecimiento de las OSC y su capacidad de interlocución con decisores/as a nivel legislativo y municipal en torno a una agenda de derechos humanos”. El Proyecto tiene como objetivo principal promover una sociedad civil inclusiva, propositiva, articulada y empoderada con reconocimiento social, político y participación efectiva en la promoción, defensa y garantía de derechos humanos en República Dominicana. Es una iniciativa que ejecutan Ciudad Alternativa, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Centro Integral para el Desarrollo (CIDEL) y la Fundación Friedrich Ebert (FES), cofinanciado por la Unión Europea.



Cofinanciado por
la Unión Europea



CIPAF



**Friedrich
Ebert
Stiftung**